



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales

Carrera de Derecho

**“Análisis del principio de presunción de inocencia en la aplicación del
procedimiento abreviado”**

Trabajo de Titulación previo a la obtención
del título de Abogado de los Tribunales de
Justicia de la República y Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociales

Autor:

Christian Manuel Valarezo Loayza
CI: 0704528710

Director:

Dr. Diego Xavier Martínez Izquierdo
CI: 0301563375

Cuenca – Ecuador

29/07/2019

RESUMEN

El procedimiento abreviado es uno de los procedimientos especiales reconocidos en el Código Orgánico Integral Penal, promulgado en el año 2014, cuyas reglas tienen como objetivo lograr una administración de justicia más rápida y eficaz. Aunque ello se ha logrado, ciertamente las reglas contenidas en la norma penal ecuatoriana, afectan derechos y garantías constitucionales como la presunción de inocencia, lo que no es concordante con el mandato de la Constitución del año 2008 de no restringir ni limitar ninguno de los derechos. A partir de ello, la investigación que se plantea tiene como objetivo fundamental analizar la afectación del principio de presunción de inocencia en el procedimiento abreviado, lo que se logra por medio de un estudio cualitativo y cuantitativo, de naturaleza descriptiva, que emplea métodos como la revisión documental y la encuesta. Por medio de análisis de la doctrina, leyes y jurisprudencia nacional; así como de encuesta a profesionales del derecho se demuestra que en efecto, en el procedimiento abreviado, se atenta contra la presunción de inocencia, legitimando el planteamiento de una propuesta que busca, disminuir la afectación del referido derecho.

PALABRAS CLAVES: Procedimiento abreviado. Presunción de inocencia. Sistemas de enjuiciamiento. Estado social de derechos. Estado constitucional de derechos.

ABSTRACT

The abbreviated procedure is one of the special procedures recognized in the Organic Comprehensive Criminal Code, promulgated in 2014, whose rules are aimed at achieving a faster and more efficient administration of justice. Although this has been achieved, certainly the rules contained in the Ecuadorian criminal law, affect rights and constitutional guarantees such as the presumption of innocence, which is not consistent with the mandate of the Constitution of 2008 not to restrict or limit any of the rights. From this, the research that is presented has as its fundamental objective to analyze the affectation of the principle of presumption of innocence in the abbreviated procedure, which is achieved through a qualitative and quantitative study, of a descriptive nature, which employs methods such as documentary review and the survey. By means of analysis of the doctrine, laws and national jurisprudence; as well as a survey of legal professionals, it is shown that, in effect, in the abbreviated procedure, the presumption of innocence is undermined, legitimizing the proposal that seeks to reduce the affectation of the aforementioned right.

KEYWORDS: Abbreviated procedure. Presumption of innocence. Systems of prosecution. Social state of rights. Constitutional state of rights.



ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN	2
ABSTRACT	3
ÍNDICE DE CONTENIDOS	4
CLÁUSULA DE LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	6
CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	7
INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO I	10
NOCIONES BÁSICAS SOBRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO	10
1.1 Antecedentes históricos de la presunción de inocencia.....	10
1.2 Nociones conceptuales sobre la presunción de inocencia	12
1.3 Naturaleza de la presunción de inocencia.....	18
1.3.1 La presunción de inocencia como principio.....	18
1.3.2 La presunción de inocencia como principio universal	20
1.3.3 La presunción de inocencia como garantía judicial.....	21
1.3.4 La presunción de inocencia como derecho fundamental	23
1.3.5 La presunción de inocencia como garantía individual.....	25
1.3.6 La presunción de inocencia como derecho subjetivo de orden público	26
1.4 Antecedentes históricos del procedimiento abreviado.....	27
1.5 Delimitación conceptual del procedimiento abreviado.....	31
1.6 El procedimiento abreviado y los sistemas de enjuiciamiento	33
1.7 Elementos característicos del procedimiento abreviado	37
1.8 Procedimiento abreviado y presunción de inocencia en la legislación y jurisprudencia ecuatoriana.....	39
CAPÍTULO II	42
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN LA CIUDAD DE CUENCA	42



2.1 Estadísticas sobre procedimiento abreviado en la Unidad Judicial Penal con sede en la ciudad de Cuenca, 2017	42
2.2 Selección y análisis de procesos judiciales del segundo semestre del 2017, de la Unidad Judicial Penal con sede en Cuenca, tramitados por procedimiento abreviado	44
2.2.1 Proceso No. 01283-2017-01032 Unidad Judicial Penal Cuenca	44
2.2.2 Proceso No. 01283-2017-00837 Unidad Judicial Penal Cuenca	45
2.2.3 Proceso No. 01283-2017-00135 Unidad Judicial Cuenca	46
2.2.4 Proceso No. 01283-2017-04379 Tribunal de Garantías Penales Cuenca	47
2.3 Crítica valorativa del principio de presunción de inocencia en los procesos judiciales analizados	48
2.4 Análisis de las encuestas e instrumentos aplicados	50
2.4.1 Encuesta aplicada a abogados de la Unidad Judicial Penal Cuenca	50
2.4.2 Encuesta realizada a Jueces de la Unidad Judicial Penal Cuenca	58
2.4.3 Encuesta realizada a procesados en la Unidad Judicial Penal Cuenca en Procedimiento Abreviado	66
CAPÍTULO III	76
ANÁLISIS CRÍTICO EN TORNO A LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL ECUADOR.	76
3.1 Análisis crítico de la vulneración del principio de presunción de inocencia en el procedimiento abreviado en el Ecuador	76
3.2 Planteamiento de ideas sobre una propuesta de solución	79
3.2.1 Antecedentes de la propuesta	79
3.2.2 Justificación	81
3.2.3 Beneficiarios	83
3.2.4 Objetivos	84
CONCLUSIONES.....	87
RECOMENDACIONES	89
BIBLIOGRAFÍA	90

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Christian Manuel Valarezo Loayza, en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación “Análisis del Principio de presunción de inocencia en la aplicación del procedimiento abreviado”, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el Repositorio Institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 29 de julio del 2019.



Christian Manuel Valarezo Loayza

C.I: 0704528710



Cláusula de Propiedad Intelectual

Christian Manuel Valarezo Loayza, autor del trabajo de titulación “Análisis del principio de presunción de inocencia en la aplicación del procedimiento abreviado”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 29 de julio del 2019.

Christian Manuel Valarezo Loayza

C.I: 0704528710

INTRODUCCIÓN

El constitucionalismo moderno se caracteriza por la garantía al conjunto de derechos y principios que son reconocidos en los textos fundamentales. Les impone a los Estados, adoptar cuantas medidas y ejecutar cuantas acciones sean pertinentes para garantizar el pleno y efectivo disfrute de todos y cada uno de los derechos reconocidos en las constituciones. Si bien siempre se le dio relevancia a lo dispuesto en estos, lo cierto es que, a partir del establecimiento de los Estados Constitucionales se asegura de mejor forma, todo lo concerniente a elementos contenidos en este tipo de documentos.

Ecuador tránsito de un Estado Social de Derechos hacia un Estado Constitucional de Derechos en el año 2008, cuando se aprobó la Constitución de Montecristi, que estableció los fundamentos del actuar de los órganos del ser público y privado, referidos especialmente a los derechos de las personas. Como resultado de ello, se promulgaron con posterioridad un conjunto de leyes que intentaron reconciliar la realidad nacional a los presupuestos constitucionales. En el año 2014 se aprobó y entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, que entre otras cuestiones, reguló un conjunto de procedimiento especiales, como el abreviado, cuya finalidad fue la de dotar a la administración de justicia de mayor eficacia y celeridad.

Aunque ello se ha logrado en gran medida, lo cierto es que las reglas contenidas en dicho Código, referente al procedimiento abreviado, afectan derechos y principios constitucionales como la presunción de inocencia, lo que ha provocado no pocas críticas y cuestionamientos. En base a ello, la investigación que se presenta analiza doctrinal, legal y jurisprudencialmente, lo referente al procedimiento abreviado y la presunción de inocencia, erigiéndose como el objetivo central, la determinación si en el abreviado, se vulnera la presunción de inocencia.

Ello se logra a través de la revisión de una amplia y controvertida doctrina, además de analizar los principales postulados legales y jurisprudencia importante, que constituyen los fundamentos investigativos. Por ello, el estudio se estructura en tres capítulos. Un primer apartado, es donde se analizan las principales tendencias doctrinales, legales y judiciales en torno al tratamiento de la presunción de inocencia

y el procedimiento abreviado, analizando sus elementos y fundamentos, que permiten conocer qué ha dicho la doctrina sobre cada una de estas variables.

Un segundo capítulo ha sido diseñado para analizar lo referente a la presunción de inocencia y procedimiento abreviado en la ciudad de Cuenca. En este apartado, se analizan las estadísticas sobre la aplicación de este procedimiento en la realidad cuencana, analizándose igualmente cuatro casos procesales en los que se aplicó el mismo, pudiéndose determinar el tratamiento y la posible vulneración de derechos en los mismos. También en este punto, se analiza las encuestas que fueron aplicadas a profesionales del derecho y procesados en procedimiento abreviado, permitiendo obtener una información valiosa sobre la consideración mayoritaria en torno a este proceso.

Un tercer capítulo, ha sido estructurado para establecer, a partir de los problemas que fueron comprobados, una propuesta de solución a los diversos problemas que se pudieron constatar. En este apartado se realiza un análisis crítico de la vulneración del principio de, presunción de inocencia en el procedimiento abreviado y sobre la base de ello, se plantea una propuesta de inconstitucionalidad a varios preceptos del procedimiento en cuestión que genere, a partir de sus elementos, una mayor garantía a dicho principio. Finalizando con las conclusiones y recomendaciones.

Es menester añadir que, la investigación que se realiza posee un innegable valor. En el Ecuador, es necesario enfrascarse constantemente en una lucha por lograr que los actos legislativos del Estado se encuentren en armonía absoluta con lo dispuesto en la Constitución. En este sentido, es necesario comprender la relevancia de que, en el proceso penal, se aseguren en la mayor cuantía posible, los derechos y principios del debido proceso, posibilitando de esta forma una legitimación del enjuiciamiento criminal que redunde posteriormente, en una administración de justicia eficaz, pronta, pero garantista.

CAPÍTULO I

NOCIONES BÁSICAS SOBRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

1.1 Antecedentes históricos de la presunción de inocencia

Aunque algunos autores contemporáneos como el mexicano Anda Juárez (2016) considera que la presunción de inocencia puede encontrarse de forma inicial en la Revolución Francesa, según lo estableció el documento más importante de dicho periodo histórico, la “Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano”, el que en su artículo 9 reconocía que “(...) todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable (...)” (Francia, Asamblea Nacional, 1789); lo cierto es que la amplia mayoría de la doctrina considera que los fundamentos históricos de esta institución, se remontan siglos atrás.

Un jurista de gran renombre como Luigi Ferrajoli (2018), considera que el antecedente de la presunción de inocencia puede encontrarse en el derecho romano. Refiere el autor que, en documentos como los escritos de Trajano, en los que se establecía que es mejor dejar impune a una persona que fuera responsable y por ende sin sanción la comisión de un ilícito, que condenar a una persona que fuere inocente; la máxima de Pablo, que propugnaba que es quien afirma determinada cosa o hecho, a quien le corresponde probarlo, y no a quien se opone al mismo; así como el los brocárdicos medievales que reafirma el principio de Pablo y defiende el hecho de que si la persona actora no demuestra lo que dice, entonces es impositivo que la persona sea absuelta de cualquier culpa; se pueden encontrar los pilares de lo que después sería, la presunción de inocencia.

Teniendo en cuenta estos elementos, es claro que tanto los escritos de Trajano como los de Pablo, se ubican en la edad antigua, en la Roma del Digesto y efectivamente, se erigen como el conjunto de ideas plasmadas por los juristas romanos a lo largo de siglos de existencia del imperio y periodo republicano. Es así que, teniendo en cuenta los presupuestos que se defendieron en la antigüedad, es claro que las ideas que se enunciaron no constituyen reglas legales, sino más bien, normas éticas, formas de proceder de los jueces o magistrados encargados de administrar justicia.

Refiere el académico Zoltan (2003) que aunque comparte el criterio de que fue en la Roma antigua donde se pueden encontrar los primeros elementos del principio de presunción de inocencia, en la edad media se puede observar una desnaturalización del mismo, algo con lo que coincide absolutamente Ferrajoli (2018). Esta observación tiene lugar debido a las prácticas inquisitivas, de la época, pues se evidencia una traspolación del principio de inocencia, por el de culpabilidad, pues como es sabido, en el proceso penal de entonces, la responsabilidad y culpabilidad de entonces, se determinaba no tanto en base a los elementos de prueba que pudieran incidir en dicha declaración, sino que solo bastaba la sospecha o presunción, para quebrantar la inocencia, lo que sucedía con bastante habitualidad.

Refiere Hobbes (2013) en la edad media comienza a enraizarse una pregunta relacionada con el hecho de que no es posible considerar la existencia de un delito si no hay sentencia condenatoria, así como que no es posible imponerse una sanción, sino por medio de una resolución de un juez. Este análisis adquiere gran relevancia, porque ya comienza a observarse a finales de esta época, un re direccionamiento de la esencia y naturaleza de la presunción de inocencia y de categorías relacionadas. En parecido sentido se pronuncia Beccaria (2015), quien afirma que:

La credibilidad, pues, debe disminuirse a proporción del odio, o de la amistad, o de las estrechas relaciones que median entre el testigo y el reo. Siempre es necesario más de un testigo, porque en tanto que uno afirma y otro niega, no hay nada cierto, y prevalece el derecho que cada cual tiene de ser creído inocente. (p. 34)

Y en otro momento refiere que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección, sino cuando esté decidido que ha violado los pactos que le fue concedida” (p. 39). Es claro que ya con estos autores, va resurgiendo una idealización mucho mejor del principio de presunción de inocencia, se va rescatando la naturaleza y esencia del mismo, tal como fue pensado originariamente en la antigüedad, y va tomando forma tal y como se conoce en la actualidad.

Ahora, se coincide con el ilustre jurista Georg Jellinek (2003) de que si bien en obras y prácticas culturales precedentes podrían encontrarse indicios de este principio, de forma concreta se regula por primera vez en dos textos de gran

relevancia, el primero, en la Constitución de Virginia de 1776 y el segundo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789.

La Declaración de Derechos de Virginia, reguló en su artículo 8 “(...) que ningún hombre sea privado de su libertad, salvo por la ley de la tierra o el juicio de sus pares” (Virginia, Convención, 1776); mientras que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, regulaba en su art. 7 que “Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por la ley y en la forma determinada por ella”; mientras que su artículo 9 refiere que “(...) cualquier hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable” (Francia, Asamblea Nacional, 1789).

Estos pronunciamientos en ambos documentos históricos, deja clara la voluntad que resurge a partir del siglo XVIII, de restaurar el sentido real y principios que informan a la presunción de inocencia. Otro documento relevante es la Carta Magna de Juan sin Tierra de Inglaterra, de 1215, en la que se establece que ningún hombre que fuere libre podrá ser detenido o encarcelado, ni siquiera se le puede restringir en sus derechos o patrimonio, sino por medio de la existencia de una sentencia de un juez o por norma jurídica del reino (Carta Magna 1215).

Estos presupuestos históricos, evidencian que si bien, fue en la historia reciente que el principio de presunción de inocencia se incorpora a los textos legales, desde la antigüedad, diversas instituciones y normas jurídicas ya contenían pronunciamientos en torno al mismo. Aunque de forma indirecta y no expresa, muchas reglas de la administración de justicia en la antigüedad, ya se referían al tratamiento de las personas y al reconocimiento de sus derechos por sobre cualquier acusación que se hiciera en su contra, lo que demuestra que en efecto, el ser humano siempre se preocupó por considerar que la persona, era inocente ante cualquier imputación que en su contra se hiciera.

1.2 Nociones conceptuales sobre la presunción de inocencia

En torno a la conceptualización de la presunción de inocencia, disímiles han sido las consideraciones que ha aportado la doctrina. Una idea de gran relevancia es la que ha sido expuesta por Nieva Fenoll (2016) cuando afirma que esta institución se erige como un principio informador de todo el proceso penal que busca “(...)

alejarse principalmente a los jueces del arcaico prejuicio de culpabilidad” (p. 2). En este sentido, es claro que más que intentar disuadir al juzgador del presupuesto incorporado al subconsciente de que, el procesado es culpable, dentro del proceso penal, la presunción de inocencia como bien expresa el autor, es un principio distintivo de todo el sistema penal, no solo del proceso penal, aunque este sea el objeto de aquel.

De gran relevancia es lo que ha sido expuesto por Villanueva (2015) quien refiere que en efecto, la presunción de inocencia debe concebirse como un derecho que le asiste a toda persona cuando se encuentra sometido a un proceso penal, porque es en efecto la inocencia, la condición humana que más es afectada cuando el individuo se enfrenta a un proceso penal. Ciertamente ello adquiere gran relevancia si se tiene en cuenta que la presunción de inocencia se positiviza por primera vez en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y no para proteger los derechos de las personas dentro de un proceso penal, sino para proteger los derechos de libertad e integridad de los individuos tanto en el entorno personal como patrimonial.

Antes de seguir adentrándonos en la aproximación a una definición de esta institución, es menester referir que no toda la doctrina ha estado siempre a favor de esta categoría. Como bien expresa Vázquez Rossi (2011) la amplia mayoría de la doctrina italiana, se mostró en una etapa importante de su historia, reacia a aceptar la naturaleza y esencia de la presunción de inocencia, porque defendía el hecho de que, su contenido, afecta el desempeño pleno de aquellas instituciones encargadas de demostrar el cometimiento de un hecho delictivo. Claramente ello era el resultado del predominio de concepciones doctrinarias como el delincuente nato o el delito natural.

En ese sentido, el ilustre jurista Manzini (1951) afirmó que la presunción de inocencia en realidad se trata de una consideración irracional del ser humano, pues, ante actos que tenían lugar en el proceso penal relacionados con la detención del presunto comisor del hecho, los elementos que indican la existencia de sospechas de que alguien ha cometido un delito, el propio sometimiento del procesado a las actuaciones dentro de la investigación, la consideración o imposición de la prisión provisional al presunto delincuente mientras dure el proceso y otras tantas

situaciones, evidencian lo que al decir del autor, demuestran la pertinente realidad, que más que la existencia de la inocencia, lo que existe es presunción de culpabilidad.

En este sentido, viéndolo desde esta perspectiva, es claro que Manzini no carecía de razón. Desde ese entonces y hasta la actualidad, existe un constante ataque a la presunción de inocencia, y pareciere que solo es un principio, una máxima que se encuentra establecida en las leyes para no vulnerar los derechos del sujeto procesado, pero que, fuera de ello, no provoca mayores y reales consecuencias en el proceso penal y para el sujeto. Entonces, claramente el contenido de esta institución ha sido ampliamente debatido y no ha sido, ni es en la actualidad, pacífico la discusión en torno a ello.

A pesar de ello, se comparte el criterio de autores como Armenta Deu (2017) y Barata (2009) de que en efecto, esta categoría adquiere cada vez más relevancia como presupuesto para el respeto de todos y cada uno de los derechos del procesado dentro del ámbito penal, erigiéndose como un “signo de civilización”; o como también afirmara el ilustre procesalista Luigi Ferrajoli (2018) que debe considerarse como uno de los hitos en materia de justicia y derechos de las últimas décadas. Ello sin duda alguna impone la necesidad de comprender qué debe entenderse y que significa que un sujeto tenga la posibilidad de que, aun siendo procesado, pueda conservar su estado de inocencia.

Ferrajoli (2018) refiere que esta institución se convierte en el:

(...) fruto de una opción garantista a favor de la tutela de la inmunidad de los inocentes, incluso al precio de la impunidad de algún culpable (...) la presunción de inocencia no es sólo una garantía de *libertad* y de *verdad*, sino también una garantía de *seguridad* o si se quiere de *defensa social*: de esa «seguridad» específica ofrecida por el estado de derecho y que se expresa en la confianza de los ciudadanos en la justicia; y de esa específica «defensa» que se ofrece a éstos frente al arbitrio punitivo. (p. 549)

Estas ideas que ofrecen un pronunciamiento sobre la presunción de inocencia, deja entrever algunos aspectos que muy bien pueden ser considerados para una adecuada elaboración de un concepto afín. Un elemento que deriva del punto expuesto por el ilustre académico, es el hecho de que la presunción de inocencia supone la existencia de una garantía, ello es, de una certeza en favor de un individuo, que se convierte en la seguridad de que sus derechos, tanto

personales como patrimoniales serían respetados ante un evento en el que su persona sea sujeto de determinado accionar de alguna institución estatal.

Esta garantía supone, además, la tutela, ello es, la protección de este ámbito, de forma tal que la institución ofrece a cada ser humano, un paraguas protector ante el influjo de la acción investigativa procesal de cualquier ente gubernamental, y no solo del Estado, sino también, que le ofrece la seguridad de protección ante las agresiones de las acciones de terceros. Tal amparo es importante ya que, incluso favorece la posibilidad de que, es preferible que un culpable sea absuelto a que, por lograr determinados cometidos o representar ciertos intereses, un inocente sea juzgado de forma inadecuada.

Pero el autor va mucho más allá, que la simple defensa de la no culpabilidad de una persona salvo que dicho estado sea quebrantado por una declaración competente de juez sobre lo contrario. Ferrajoli afirma que la presunción de inocencia supone la existencia de otras condiciones que van unidas, tales como la libertad y verdad, pero además, de seguridad y defensa social. En este sentido es claro que para el autor, la inocencia radica en considerar a la persona como un individuo libre, mientras no haya declaración de culpabilidad, por lo que, adoptar medidas que restrinjan ésta, supone una alteración de la esencia del instituto.

Esa libertad que defiende Ferrajoli, se deriva del hecho de que, mientras un juez no dictamine la responsabilidad del supuesto comisor del hecho, no existe una verdad objetiva y comprobada. Mientras dura el proceso, la verdad de la parte que esgrime la vulneración del bien jurídico tutelado por la norma penal, es una verdad comprobable, pero no comprobada, por lo que solo se encuentra sometida a la valoración de una parte, quien por demás, se encuentra parcializada con la misma, por lo que no puede ser sometida a juicio, para restarle libertades al procesado. Solo cuando el juez en su sentencia, motiva los argumentos de las partes, es que se está en presencia de la verdad definitiva y por ende, solo así, se justifica atentar con la inocencia del sujeto, pues ya no supondría una presunción, sino que en efecto, dicho estado no existiría.

También se comparte el criterio de que la presunción de inocencia es, en principio, seguridad. La seguridad como ya se ha expuesto, significa la certeza que tiene el procesado de que, mientras no exista dictamen condenatorio en su contra,

será tratado como inocente y por ende, tendrá y podrá seguir disfrutando de todos y cada uno de sus derechos. Ello supone una garantía de que, si en efecto se respeta esa presunción, no podrá adoptarse ninguna acción que suponga, lo contrario, pues hacerlo implica desde ya, una declaración de culpa.

Finalmente, según expone el académico, esta institución supone una garantía de defensa social, y es correcto dicho planteamiento pues, el estado de inocencia se encuentra presente en todos y cada uno de los individuos que conforman la sociedad, por lo que, llevar a cabo un acto condenatorio previo a una sentencia supondría, romper con ese estado inalterable de cada miembro de esa sociedad. Es así que los seres humanos en el territorio en el que habitan y desarrollan habitualmente sus actividades, lo hacen con la certeza de que no se realizará ningún tipo de acción que le restringirá sus derechos y bienes, debido a que se encuentran amparados por un estado continuo de inocencia. Ello, sin duda alguna, asegura la estabilidad y avala dicha condición.

Ahora, una consideración un poco distinta la tiene Barata (2009) quien expone que:

La presunción de inocencia forma parte de las garantías procesales, es decir, los principios de legalidad a cumplir en las diferentes etapas del proceso penal. No son formulaciones retóricas, sino valores que hay que aplicar para que los órganos judiciales actúen con imparcialidad e independencia. Conforman los protocolos de calidad, los filtros que el sistema judicial desarrolla para verificar y conseguir su buen funcionamiento, y hacer que la capacidad sancionadora del estado, el ius puniendi, se desarrolle con el debido proceso. (p. 221)

Esta postura, asume una condición mucho más flexible en torno a la cuestión actual de la institución. Como se ha defendido con anterioridad, la esencia misma de la presunción de inocencia supone la absoluta seguridad de que ninguna autoridad o institución del Estado puede limitar el ejercicio de los derechos personales y patrimoniales de la persona mientras no sea declarada su culpabilidad por una sentencia. Barata reformula una nueva visión, mucho más actual, no porque sea más consensuada, sino porque responde de mejor forma a lo que verdaderamente sucede en el proceso penal contemporáneo.

Como también se ha expresado en este punto, las diversas y constantes acciones que son ejecutadas por los órganos investigativos durante el proceso

penal, suponen de forma efectiva una restricción de muchos de sus derechos, y no solo en el orden de los bienes, sino que en muchísimas ocasiones, la propia restricción de la libertad supone algo común y habitual, por lo que no se sigue tanto la naturaleza de esta presunción, sino más bien todo indica que, cuanto se hace durante este proceso, acredita una presunción de culpabilidad y es ello, lo que ha intentado refrendar Barata con su definición de presunción de inocencia.

Es así que considerando todos y cada uno de estos elementos, es claro que en la actualidad, aunque la presunción de inocencia se erige como una institución que constituye el pilar fundamental sobre el que serían los sistemas procesales penales contemporáneos, en la práctica, mucho dista de que la presunción de inocencia sea en realidad eso, pues las constantes y habituales acciones que tienen lugar dentro del proceso penal con respecto al procesado, difieren mucho de ser meras presunciones retratar al enjuiciado como inocente.

No se está contesté desde la postura de esta investigación con el criterio de Barata. Son principios también del proceso penal, la legalidad, la imparcialidad y la independencia del juez, por lo que no debe supeditarse o conformarse como contenido de la presunción de inocencia estas tres instituciones. Es necesario comprender que si se desea en verdad un procedimiento donde los principios del sistema acusatorio imperen, y en el que el procesado de verdad y de forma efectiva es considerado inocente hasta tanto se dicte una sentencia en su contra, comprender que no deben realizarse acciones que atenten contra las libertades del sujeto, sencillamente porque se encuentra investido aún, del conjunto de derechos y potestades que el ordenamiento jurídico sustantivo y adjetivo le confieren.

Es así que no debe entenderse la existencia de una presunción de inocencia a medias, que es lo que en la realidad contemporánea persiste en la amplia mayoría de los ordenamientos jurídicos procesales. Es claro que, ante determinadas vulneraciones de bienes jurídicos protegidos, es necesario adoptar determinadas medidas, de orden cautelar, que garanticen el futuro sometimiento del procesado a la administración de justicia, debido a la existencia de fundados temores de que intente evadirla. Es por ello, que atentar contra la presunción de inocencia debe tener un carácter excepcional y extraordinario, de forma tal que no se convierta en una regla, situación que impera en la actualidad.

1.3 Naturaleza de la presunción de inocencia

Delimitar la naturaleza jurídica del principio de presunción de inocencia, no constituye tarea sencilla. La amplia gama de conceptualizaciones y consideraciones entorno a esta institución, han provocado una amplia existencia de posturas en torno al contenido de este. Es así que ha sido considerado como: principio universal, garantía judicial, derecho fundamental, garantía individual, derecho subjetivo de orden público, evidenciándose indudablemente, lo complejo del asunto. Es así que poder comprender brevemente cada una de las posturas que se han erigido en torno a ello, constituyen una necesidad inobjetable en el presente estudio.

1.3.1 La presunción de inocencia como principio

Lo primero de considerar si la presunción de inocencia puede ser considerado como un principio, es entender que supone la naturaleza y existencia propia de esta categoría. Diversas y variadas han sido las conceptualizaciones entorno al vocablo principio. En el sentido que ser analizada en la investigación, se establecerá desde el entorno jurídico como claramente exige el tipo de estudio que se presenta. Una definición importante en torno a los principios en el ámbito del derecho, ha sido la que ha expuesto el ilustre académico argentino Godio (2016) quien afirma siguiendo la postura asumida en su momento por Truyol y Serra (1997) que deben considerarse como tal las exigencias éticas que deben establecerse en todas las relaciones que se establecen entre sujetos de derecho.

En el mismo orden de ideas Mosquera (2018) refiere que deben entenderse como tal aquellos valores superiores que se encuentran reconocidos fundamentalmente en los textos constitucionales de cada nación, actuando como innegables irrelevantes garantías jurídicas para asegurar el cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales. Agrega que este conjunto de principios interactúan entre sí para conformar el llamado modelo de estado constitucional. Por su parte Acosta (2010) refiere que los principios deben considerarse como aquellos “(...) valores propios e intrínsecos del ordenamiento jurídico, así como el procedimiento mediante el cual se descubren los mismos, siendo éste un proceso de integración y/o deducción adelantado por el operador jurídico, quien los convierte en normas” (p. 200).

Otra delimitación de gran relevancia es la que ha sido dada por el ilustre jurista Prieto Sanchís (2011) quien expone que:

En resumen, los principios (...) son la consecuencia de un proceso de integración del derecho, o sea, una actividad creadora de normas, y tanto más creadora cuanto menos es el número de disposiciones expresas que puedan aducirse como justificación de la validez de cierto principio. (p. 212)

Esta consideración del autor permite afirmar la triple concepción de la categoría principios en el ámbito del derecho, pues por una parte permite definirlos como fuente material de normas jurídicas, constituido por un conjunto de valores que están presentes dentro del ordenamiento jurídico, y que el operador de dichas normas debe revelar a través de su actividad interpretadora. Pero también supone que los principios en el ámbito del derecho pueden ser considerados como una fuente formal de dichas normas, a través de un proceso previo que realiza el mismo operador jurídico develando esos valores y significados contenidos en la ley, y exteriorizándolos a través de disposiciones jurídicas. Finalmente es claro, que dichos principios constituyen también, la consecuencia de las consideraciones anteriores, pues en efecto, la actividad interpretativa que realizan los diferentes operadores de justicia, hacen que esos valores derivados de dicha acción, se traduzcan en una norma de hecho.

Teniendo en consideración estos elementos que han sido expuestos en torno a que entender por principios, es claro que cuando se hace referencia a estas categorías, se alude al conjunto de valores rectores que informan la actuación de todos y cada uno de los sujetos en el desarrollo de las relaciones jurídicas que tienen lugar en la sociedad, y que se encuentran fundamentadas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Se trata de pautas que deben ser observadas por el operador jurídico, más allá va del significado gramatical de las leyes, pues ello supone, poder interpretar la esencia y el significado que posee cada elemento normativo más allá de lo que puede ser observado por la simple reunión de palabras.

Es por ello, que ha sido ampliamente considerado por la doctrina, que la presunción de inocencia es indiscutiblemente, un principio. Lo es porque la consideración de que la persona se encuentra investida de inocencia en todo momento, constituye un presupuesto fundamental del ser humano. El desarrollo y

evolución de los sistemas procesales contemporáneos, han rebasado la simple consideración inquisitiva de que, dentro de un proceso penal el individuo es culpable, aunque no existieran las pruebas suficientes demostrables y demostradas dentro de un debido proceso. Ello se ha logrado en virtud de la necesidad de considerar al ser humano, procesado, como sujeto dentro del proceso penal, y no como objeto. Es así que la presunción de inocencia constituye un principio, que debe ser considerado seriamente, en la interpretación que cada operador de justicia, realice de la norma jurídica procesal penal.

1.3.2 La presunción de inocencia como principio universal

Como hasta aquí se ha argumentado, la presunción de inocencia se erige de forma indiscutible como un principio. Ahora es pertinente conocer si se pudiera considerarse como un principio de carácter universal. Es claro que cuando se emplea el término principio universal, supone que esos valores que se derivan del acto interpretativo de los operadores de justicia, sobre los pilares que deben dirigir las categorías jurídicas aplicadas a las relaciones que se establecen en la sociedad, amparan a todos los seres humanos que viven en el planeta.

Fue así, por ejemplo, que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, estableció como principio universal, la presunción de inocencia, cuando el artículo nueve expresó que “Art. 9. Presumiéndose de inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que nos sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley” (Francia, Asamblea Nacional, 1789). Este pronunciamiento constituyó como ya se ha expuesto, el fundamento normativo originario de lo que después sería desarrollado en la amplia mayoría de los textos constitucionales de todo el mundo.

Posterior a ello, el acto histórico que determinó la consideración de la presunción de inocencia, como principio universal fue la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 la que expuso en su artículo 11 numeral 1 que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y el juicio público en el que

se hayan asegurado todas sus garantías necesarias para su defensa” (ONU, Asamblea General, 1948)

El hecho de que la comunidad internacional haya decidido incluir este principio en el documento de referencia, supone la relevancia que para toda la humanidad posee el hecho de sostener y conservar en todo ser humano, la cualidad de inocencia ante la imputación de cualquier hecho delictivo. Supone sin lugar a dudas que el amparo que presupone su contenido, es aplicable a toda persona, sin distinción ni consideración de ningún criterio que suponga una postura discriminatoria.

Ello ha sido considerado así, por toda la doctrina. Por ejemplo, el académico Herrera (2015) refiere que cuando se habla de presunción de inocencia estamos en presencia de un principio universal de carácter fundamental, y esta consideración ha sido ampliamente defendida por los autores. Es así que se coincide de forma absoluta de que el principio de presunción de inocencia es además de un principio, uno que tiene la cualidad de ser universal, ello es, aplicable a todos y cada uno de los seres humanos, por la mera condición de pertenecer a la raza humana.

1.3.3 La presunción de inocencia como garantía judicial

La presunción de inocencia también ha sido considerada como una garantía judicial. Entorno a esta consideración la ilustre académica argentina Cortázar (2012) afirma que las garantías judiciales se erigen como aquellos mecanismos o instrumentos de defensa que sirven para asegurar y garantizar el efectivo ejercicio de un derecho a su titular. Agrega que en principio constituyen “(...) aquellos medios con idoneidad para hacer valer los derechos de las personas” (p. 67). Por su parte el investigador Villavicencio (2016) refiere que deben entenderse como tales “(...) todos aquellos derechos que tienen como finalidad la protección de la persona que se encuentra sometida a un procedimiento legal ante una autoridad competente, que puede ser en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (p. 17).

Pero ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la que con suficiencia se ha pronunciado sobre que debe entenderse por esta garantía que se encuentra reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que en su artículo ocho establece que cualquier persona tiene derecho

a que se le respeten las debidas garantías dentro de un proceso penal dentro de las que se encuentran a ser oído, ser entregado a un juez o tribunal competente, que además sea independiente e imparcial, a que se presuma su inocencia con un conjunto de garantías mínimas establecidas en el propio precepto dentro de lo que se encuentra a ser asistido por un traductor o intérprete, a comunicársele de que se le acusa, a poder defenderse y ser defendido por un profesional competente, a no auto inculparse, a recurrir y a que su proceso sea público. (OEA, CEIDH, 1969)

La Corte IDH en sus fallos también se han pronunciado sobre las garantías judiciales, esgrimiendo que no debe restringirse al conjunto de recursos judiciales existentes, sino al conjunto de formalidades y exigencias que deben respetarse en todas y cada una de las instancias judiciales dentro del proceso, fuere cual fuere la naturaleza, de forma tal que le permitan a las personas que se encuentran a su interior, poder defender de forma adecuada sus derechos ante el conjunto de acciones y ataques que supone el comportamiento de los órganos estatales. (Corte IDH, 2016)

Teniendo como fundamento todos los elementos que han sido expuestos, es claro que las garantías judiciales se erigen como aquellos mecanismos o instrumentos que deben encontrarse establecidos en los ordenamientos jurídicos procesales contemporáneos, que le garanticen a las partes procesales poder hacer valer y exigir el respeto de todos sus derechos ante las acciones y comisiones de los órganos investigativos del Estado. Se trata no sólo de aquellas instituciones que son reconocidas en el sistema legal como garantías judiciales en sí, sino como cualquier regulación o norma que se pronuncie sobre ello.

Esta postura es asumida, por el académico ecuatoriano García Falconí (2017) quien refiere, que la presunción de inocencia debe ser considerada como una garantía “básica y vertebral del proceso penal”, erigiéndose como la clave explicativa sobre la que se fundamenta todo el régimen de garantías procesales. Unido a ello como también expone el académico mexicano Hernández Barros (2015), expone que la garantía judicial de la presunción de inocencia impone también la obligación a la función legislativa de abstenerse de crear normas jurídicas generales o delitos en el ámbito penal, que contravengan dicho derecho, garantizando de forma efectiva

que las normas procesales en el ámbito penal, respeten la cualidad de inocencia de todo sujeto que es vinculado con la posible comisión de un hecho delictivo.

En este sentido es indiscutible que la presunción de inocencia sería como una garantía judicial de gran valor, no sólo porque lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, sino porque en efecto, presumir la inocencia de una persona, supone que ésta tiene la certeza de que se le tratará como tal cuando sea sometido a los ataques de un proceso investigativo en el orden penal. De esta forma, el hecho de que se presuma la no culpabilidad, supone la garantía para el procesado, de que las acciones que serán adoptadas, no estarán regidas por la presunción de culpabilidad, debiéndosele asegurar dicha condición.

1.3.4 La presunción de inocencia como derecho fundamental

Otro de los elementos vinculados con la naturaleza de la presunción de inocencia es aquella que lo considera como un derecho fundamental. para que la noción de derechos fundamentales pueda desplegar toda su operatividad, no basta con un texto constitucional que se limite a enumerar retóricamente los tradicionales derechos básicos de la persona en sus lineamientos generales. Es preciso que la Constitución defina los elementos esenciales de su régimen jurídico; sujeto, objeto, facultades básicas que comprende su contenido.

De modo que quede constitucionalmente configurado con la previsión y el rigor propio del lenguaje jurídico, que es el estatuto básico de estos derechos en un ordenamiento. Sólo a partir de ello, el reconocimiento constitucional podrá desempeñar la función que en los sistemas jurídicos contemporáneos, están llamadas a desempeñar las declaraciones de derechos fundamentales, cual es la de operar como límites o frenos a los poderes públicos, que sería de alguna manera la dimensión subjetiva o negativa de los derechos fundamentales y de otro modo ser principios objetivos del régimen jurídico político, que guía la actuación de tales poderes en su funcionamiento cotidiano, es la denominada función positiva de los derechos fundamentales.

La norma jurídica constitucional también debe tener una posición de superioridad en el ordenamiento con respecto a las demás normas y en particular, suprallegalidad frente a las normas emanadas del legislador. Esta idea es importante

para construir un concepto de derechos fundamentales, porque destaca lo más específico y peculiar; la fuerza vinculante frente a todos los poderes y en particular frente al legislador. Anteriormente los derechos fundamentales sólo eran válidos dentro de la ley y eran operativas en la medida que el legislador las desarrollara, hoy las leyes, sólo valen en el ámbito de los derechos fundamentales, en la medida que éstos sean respetados.

La categoría de derechos fundamentales, ha cambiado gracias a que se han convertido en derechos frente al legislador y frente a todos los poderes del Estado. Dworkin (2002) califica esto como derechos a resguardo de mayorías parlamentarias que quisieran legislar en contra de ellos. Ahora, como bien expone Ferrajoli (2001) los derechos fundamentales deben ser considerados como “(...) aquellos derechos subjetivos que corresponde universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados del *status* de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar” (p. 19).

En este sentido tal y como lo ha sido expuesto a lo largo de este acápite, indiscutiblemente los derechos fundamentales trascienden al cúmulo de derechos constitucionales. Es necesario comprender que los derechos fundamentales se erigen como el conjunto de prerrogativas que poseen los seres humanos por la mera condición de pertenecer a la raza humana, y los que pueden o no estar en los textos fundamentales de los países, aunque sí deben siempre encontrarse regulados en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En este sentido, se coincide con el criterio de que, la presunción de inocencia es un derecho fundamental. Esta postura ha sido ampliamente defendida por autores como Nogueira Alcalá (2005) y Martín Diz (2011) quienes esgrimen que a partir de la primera mitad del siglo XX, la presunción de inocencia comenzó establecerse en los regímenes constitucionales de derechos de las cartas magnas contemporáneas, fundamentándose en el conjunto de instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que fueron promulgados a partir de dicho periodo.

Teniendo todo en consideración, es claro que la presunción de inocencia se erige como un derecho fundamental, pues la cualidad de inocencia es consustancial a la existencia misma de la persona. Al encontrarse regulado en los textos jurídicos

de cada sociedad, cada individuo al ser sometido a un procedimiento investigativo determinado, debe estar investido, de la condición de no ser juzgado antes de que una autoridad competente así lo haga y después de haber sido sometido a las reglas de un debido proceso, ello sin duda alguna es consustancial a los sistemas procesales penales democráticos.

1.3.5 La presunción de inocencia como garantía individual

Otros de los elementos sobre los que se ha sustentado la naturaleza de la presunción de inocencia, ha sido el de considerarlo como una garantía individual. En torno al vocablo garantía el académico ecuatoriano Ávila Santamaría (2013) afirma que las garantías son instrumentos establecidos por el ordenamiento jurídico para prevenir o enmendar la vulneración de algún derecho que se encuentra reconocido en el propio sistema legal, puesto que sin la existencia de estos derechos las debidas garantías, se convertirían en meros enunciados que no tendrían eficacia en el entorno real al que van destinados.

Sobre estas el académico Ibáñez (2005) afirma que:

En la garantía adecuada, todos y cada uno de los derechos deberían tener un mecanismo para la reparación del derecho, con procedimientos constitucionales cabales, sencillos y rápidos. En este presupuesto, el procedimiento lleva a una solución de fondo, y no cautelar, subsidiaria o excluyente. Estas garantías son propias de los estados constitucionales y sociales de derecho y, es más, el régimen de garantías para la totalidad de derechos es el mejor modo de profundizar la democracia. (p. 48)

Es así que, las garantías se erigen como un instrumento por medio del cual se garantiza de forma efectiva, se asegura en un entorno determinado, el pleno cumplimiento y respeto de un derecho que posee una persona. No se trata solamente de cuánto esta persona se encuentra sometida a las reglas de un proceso determinado, sino que la garantía rige y se encuentra vigente en todo momento. Teniendo en consideración, es claro que la presunción de inocencia podría considerarse como una garantía de orden individual, porque le ofrece a la persona, la seguridad de que su condición de inocente, será respetado en todo momento.

Ello implica sin duda alguna, que la no culpabilidad es una condición innata y cada acción u omisión que sea llevada a cabo por los órganos y organismos estatales, tendrán que tener como fundamento, a la misma, pues es una condición

que va unida a la persona mientras no se tenga una sentencia condenatoria que logre quebrantar dicha presunción. Es así que la presunción de inocencia se erige como la seguridad de todo individuo esté o no presente dentro de un proceso investigativo, de que su condición no será afectada ni se le vulnerará ningún derecho, incluso si es que fuere relacionado con la presunta comisión de un hecho delictivo.

1.3.6 La presunción de inocencia como derecho subjetivo de orden público

Otro de los elementos que han sido expuestos en torno a la presunción de inocencia, es aquella que lo considera como un derecho subjetivo de orden público. Un primer aspecto que es necesario identificar es que puede considerarse como derecho subjetivo. Ferrajoli (2001) refiere que un derecho subjetivo es “(...) cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica” (p. 19). Por su parte el académico español Pérez (2016) refiere que debe entenderse como tal “(...) un poder o facultad atribuido a un individuo para la satisfacción de intereses propios, y del cual surgen deberes para una o varias personas” (pp. 245-246).

Una idea importante en torno a los derechos objetivos la expone la investigadora Arriagada (2016) cuando expresa que es claro y ampliamente aceptado por la doctrina, que esta institución posee un entorno jurídico pero a la vez moral, pues el fundamento ético que compone todo derecho reconocido a un individuo, tiene que sustentarse obligatoriamente en una norma jurídica que lo garantice. Se coincide con el autor cuando expresa que “Un derecho subjetivo no es una voluntad o un interés jurídicamente protegido. Es la protección de esa voluntad o de ese interés, es decir, la posición jurídica subjetiva” (p. 154).

Es indudable entonces que el derecho subjetivo debe reunir tres elementos esenciales que han sido ampliamente considerados y en los que la doctrina se encuentra conteste, pues como bien expresa el ilustre jurista Bustos (2015) las tres tradicionales posturas que han ofrecido una consideración integral de esta institución, han logrado asentarse en la amplia mayoría de las posturas actuales. Es así que para hablar de forma adecuada sobre un derecho subjetivo se necesita al decir de Savigny (2005), entenderla como un poder o imperio de la voluntad; pero

también como bien decía Windscheid (1987), debe entenderse también como una necesaria regularización en la normativa jurídica; mientras que además debe erigirse como un interés que supone los límites del ejercicio de sus derechos subjetivos defendida por Ihering (2013).

En este sentido, es claro que el derecho subjetivo debe considerarse como la facultad de erigir en el poder de la voluntad que posee el individuo o la sociedad para reconocer como tal una prerrogativa, cuyo interés debe estar legalmente garantizado a través de su regulación en el ordenamiento legal y protegido por el mismo, estableciendo penalidades y mecanismos de garantía y seguridad ante la posible vulneración de dichos derechos. Teniendo ello como presupuesto, es claro que la presunción de inocencia puede considerarse de forma indiscutible como un derecho subjetivo, pues se erige como el poder de la voluntad o el interés que amerita ser reconocido por el ordenamiento legal, de que la persona sea tratada como tal en todo momento.

Es incuestionable el carácter público que debe garantizársele al mismo, ya que la cualidad de inocencia tal y como se ha venido exponiendo hasta el momento, es consustancial a una necesidad de tratar como tal a todos y cada uno de los miembros de la sociedad, de forma tal que, esta facultad le impone a los demás adoptar medidas de respeto y garantía ante la posible vulneración o riesgo inminente de alteración de las diversas libertades que posee la persona.

1.4 Antecedentes históricos del procedimiento abreviado

En el ámbito nacional existen importantes antecedentes históricos, pues del análisis que se puede realizar de las normas jurídicas procesales penales previas a esta normativa, se puede constatar determinadas normas que se pronunciaban de una u otra forma, fundamento jurídico y doctrinal por las cuales se adoptó o este tipo de procedimiento especial. En base a ello es pertinente realizar algunas observaciones en torno a las leyes más importantes que de una u otra forma se relacionan con la esencia y naturaleza de este procedimiento.

En el Ecuador, en el año 1853 se aprobó la entonces Ley de Procedimiento Criminal que venía a suceder a la ley del mismo nombre pero del año 1839. Un dato importante es que previo a esta norma regía en el Ecuador la Ley de Jurados del

año 1848 que tenía determinadas reglas en torno a un procedimiento que desde entonces se denominó sumario y en el que establecía determinadas normas que muy bien podrían constituir de lo que hoy se analiza. Es así que por ejemplo establecía el término de 3 días para poder terminar dicho procedimiento, en cuya audiencia se realizarán todos y cada uno de los actos relacionados con la aportación de pruebas y el examen de los testigos (art. 23). También se refería que una vez que terminara la audiencia del sumario, el juzgador le impondría al fiscal la obligación de presentar la acusación de ser necesaria por escrito en el término de 24 horas (art. 29). Estos elementos de la Ley de jurados constituyen un intento desde dicho período, por reducir los términos y agilizar los trámites en aquellos procedimientos que no ameritaran ser sometidos al ordinario. (Ecuador, Senado-Cámara de Representantes, 1848).

Posterior a esta norma como ya se había reafirmado, la Ley de Procedimiento Criminal de 1853, igualmente establece determinadas normas dentro de su texto o, relacionadas con la reducción de plazos y términos dentro de los procesos, lo que también evidencia, una voluntad de agilizar la tramitación procesal en el ámbito penal. En este aspecto refiere por ejemplo, que la etapa o período de aportación de medios probatorios puede tener una extensión de hasta 20 días período en el que el juez notifica a las partes, aquellas pruebas que fueron aportadas y las que fueron admitidas (art. 10). En este período, también se realizarán todos los aspectos relacionados con la tacha de testigos y se realizarán las confrontaciones pertinentes entre los mismos, a los efectos de determinar la veracidad de cada dicho cuando éstos fueren contrarios (art. 11). (Ecuador, Senado-Cámara de Representantes, 1853)

Un elemento importante de esta norma, es que regula en su artículo 12 el hecho de que si algún funcionario por cualquier motivo que fuere, incumplía en el término para la notificación a las partes de cualquier documento o acción que tuviere lugar dentro del sumario, le será impuesta sanciones pecuniarias. Ello reviste gran relevancia, pues la agilidad con la que debe ser tramitado este tipo de procedimiento, les imponía a los agentes actuantes el deber de hacerlo con diligencia y rapidez.

Otra de las normas de la historiografía procesal penal ecuatoriana de gran valor, es el Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal de 1871, que entre otras reglas establece que en el sumario los juzgadores tienen la obligación de respetar y hacer cumplir los términos y plazos establecidos, evitando la realización de diligencias que no sean pertinentes o indispensables para la demostración del delito (art. 45). También expresa que el juez tendrá que tener cuidado con admitir cualquier acción o diligencia cuya finalidad sea dilatar innecesariamente el proceso, debiendo rechazar cualquier excepción que fue interpuesta con esta finalidad (art. 47). Un aspecto importante que regula en torno a las normas predecesoras es que reduce el tiempo del procedimiento sumario a 10 días (art. 125). (Ecuador, Congreso Nacional, 1871)

Un aspecto importante que fue regulado en esta norma fue lo relacionado con aquellos procedimientos en expedientes o delitos que no son de jurado, que trataba aquellas infracciones que no llegaban a constituir delito cuya magnitud o gravedad no fueran elevadas. Para ello, una vez que se realizaba la acusación contra la persona, el juzgador automáticamente procedía a determinar la fecha y hora para la realización de la audiencia verbal, la que tenía que tener lugar en un término no mayor de quince días a la formulación de cargos (art. 285), en cuyo período las partes tenían que presentar los cuestionarios y los elementos de prueba como las testificales, debiéndose examinar y aportar, admitir uno, y practicar cualquier otro medio de prueba que fuere propuesto en ese mismo periodo (art. 286).

De la revisión que se realizó de las normas procesales penales subsiguientes, ellos son, el Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal (1892), el de (1906) y el Código de Procedimiento Penal de (1938) con sus reformas posteriores, no se encontró referencias que pudieran considerarse como antecedentes normativos de lo que hoy ha sido reconocido como el procedimiento abreviado, pues lo que hizo fue de una u otra forma establecer cuestiones vinculadas con la pertinencia y obligación de los jueces de agilizar determinadas acciones y evitar dilaciones innecesarias.

Ahora, de la modificación que se le realizó al Código de Procedimiento Penal de 1938, en el año 1983, hubo modificaciones importantes en este sentido, pues se incluyó un Título VI bajo el nombre de “Procedimientos Especiales”, distinguiéndolos

entre aquellos que se tramitaran debido al fuero (arts. 404-414), y aquellos que tuviera lugar por razón de la materia (arts. 415-434). A este tipo de procedimientos podrían someterse entre otros delitos, aquellos que fueron ejecutados por la prensa o demás medios de comunicación, y también los que implicaran la necesaria promoción de la acusación particular. En este tipo de procedimientos, los términos eran muy inferiores a los que se seguían para los procedimientos ordinarios, disminuyendo los plazos, por ejemplo, que las partes tenían para realizar determinadas acciones probatorias, así como para practicar las mismas, llevar a cabo la audiencia y fallar. (Ecuador, Congreso Nacional, 1983)

En la última reforma que se le hizo al Código de Procedimiento Penal de 1938, que tuvo lugar en el año 2000, también se realizaron determinados pronunciamientos legales de relevancia. Estableció entre otras cuestiones el principio de celeridad (art. 6); también reguló entorno a los acuerdos de reparación para determinados delitos, en cuyo caso las partes podrán llegar a un acuerdo siempre con la autorización del fiscal y finalmente del juez de garantías penales, en cuyo caso de aceptarse se decidirá el archivo definitivo de la causa, teniendo dicho acuerdo el mismo valor que una sentencia dictada por el juez (art. 37). (Ecuador, Congreso Nacional, 2000)

Otro elemento importante de la modificación de esta norma en el año 2000, es que a partir del artículo 369 se pronuncia sobre el Procedimiento Abreviado como parte de los especiales. En esta norma que constituye el antecedente del COIP, establece que este tipo de procedimientos aplica para aquellas infracciones o tentativas de delitos, en la que la sanción privativa de la libertad no sea mayor a cinco años, pero además tienen que darse determinados requerimientos como que el sujeto procesado debe admitir los hechos que se le están imputando, así como estar de acuerdo en regirse por las reglas de dicho procedimiento. Es necesario constatar de forma efectiva, que el consentimiento de someterse a las normas de Procedimiento Abreviado así como la comisión de los hechos, se haya realizado sin la vulneración de ninguno de sus derechos humanos y procesales.

Como puede evidenciarse, es claro que la normativa procesal penal ecuatoriana, si bien es cierto que hasta el año 2000, no hubo regulación especial en torno a un Procedimiento Abreviado, sí consta desde las normas procesales previas

determinados preceptos que indican una voluntad creciente de legislador ecuatoriano, por dotar al proceso penal de mayor agilidad y celeridad, a través de la reducción de los plazos y términos y de ciertos procedimientos que no ameritan ser tramitados por el ordinario.

1.5 Delimitación conceptual del procedimiento abreviado

Es necesario concebir a partir de todos los elementos que han sido expuestos, que el procedimiento abreviado se origina ante la crisis existencial de la figura del proceso penal tradicional, que se distinguía cada vez más, con mayores costos y un incremento sustancial de la morosidad. Sobre este aspecto el ilustre jurista Cafferata Nores (1997) afirmó que:

No puede discutirse la crisis por la que atraviesa el sistema de enjuiciamiento que hunde sus raíces en el derecho romano canónico con el colorido que le brindó la legislación napoleónica, tal vez por el fracaso del principio de legalidad entendido de manera absoluta y sin ningún tipo de concesión. (p. 3)

En base a ello es claro, que dentro de las posibles causas que dieron origen al establecimiento de este tipo de procedimientos especiales en general, y al abreviado en particular, se encuentra en la existencia de problemas reales en torno al encarecimiento de la justicia y al distanciamiento cada vez mayor entre el inicio y el final del mismo, provocando que en muchos países los procesos penales duraran hasta años. Esta problemática también fue tratada por Maier (1993) quien expresó que “La crisis del sistema penal y de la pena estatal es irreductible, aunque derive de múltiples factores. Es posiblemente parte de una crisis más amplia del propio sistema de organización social, sintéticamente, la crisis del Estado-nación, en el mundo moderno” (p. 47).

Siguiendo la idea de este propio autor, reafirma que:

Los juristas y legisladores introdujeron ciertas modificaciones al sistema, todas ellas sumamente discutibles y discutidas en la actualidad, pues, como se verá, en todo caso producen un ataque contra las bases ideales originarias del sistema (...) se prosiguió con sistemas de abreviación del rito penal, que conducen, incluso, a negociaciones sobre la pena misma. (Maier, 2001, p. 810)

Ello es evidencia sin duda alguna, que los últimos dos siglos, el derecho penal y el proceso penal que en esencia es objeto, enfrentó las más grandes dificultades existenciales en toda su historia, sustentado en la imposibilidad de dar solución a los disímiles problemas que se iban originando con la historia, evidenciándose una

corriente maximalista en el ámbito penal, tendencia que como bien expone la investigadora Gálvez (2016) presupone una negación radical de los principios de intervención mínima, de forma tal que las normas de derecho penal, deben ser utilizadas para resolver cualquier tipo de conflicto generado en la sociedad, que más que resolver los problemas originados lo que hacía era empeorarlos. Es así que en la amplia mayoría de las naciones, se vio la creación de este tipo de procedimientos, una solución mucho más efectiva, que logrará ofrecer garantías mínimas por sobre la necesaria celeridad.

Una distinción importante sobre el procedimiento abreviado, lo hace la importante procesalista Clariá Olmedo (2008), quien expresa que:

La abreviación del trámite resulta de la simplificación legal de la actividad, dentro de la medida prudente para no afectar la acusación o la defensa, ni limitar indebidamente el ejercicio de la jurisdicción. Tiene su aplicación en causas por infracciones de menor o escasa identidad, o cuando la investigación resulta simple o sencilla porque las circunstancias permitieron en forma ágil o inmediata los fundamentales elementos de convicción. (p. 305)

Esta idea vislumbra muy bien la esencia propia del procedimiento abreviado. Es así como la investigadora ofrece algunas ideas que son de gran importancia para poder comprenderlo. Una de ellas es la referida a lo que denomina simplificación legal, lo que suponen este tipo de procedimientos que está sustentado en la legalidad, ello es, el pleno y absoluto cumplimiento de las normas jurídicas establecidas, debe lograrse desde el propio ordenamiento jurídico, reglas procedimentales mucho más simples, relacionadas esencialmente con la disminución de los plazos para la realización de todos y cada uno de los actos que tienen lugar en un procedimiento normal.

También es de gran relevancia, según la autora, el hecho de que esa simplificación que debe lograrse en el orden jurídico procesal, debe estar supeditada a la necesaria y pertinente valoración de la prudencia, de forma tal que la reducción, por ejemplo, de los términos para la preparación de la defensa o la aportación de medios probatorios, o su práctica, no debe realizarse vulnerando ninguna de las garantías o derechos que informan al debido proceso y que en definitiva le aseguran al procesado el pleno ejercicio y disfrute de los mismos.

Este aspecto derivado del análisis de la autora, posee gran relevancia, pues indica que la reducción de estos términos en este tipo de procedimiento, no puede realizarse por sobre la restricción bajo ninguna circunstancia de los derechos del procesado. Es así que indiscutiblemente, el procedimiento abreviado con las reglas de disminución de términos y plazos que lo configuran, deben estar dirigidas única y exclusivamente al favorecimiento de la condición del procesado, y no de ninguna otra institución o sujeto de la sociedad.

Otro de los importantes autores que han tratado la materia, Vásquez Rossi (2011), afirma que el procedimiento abreviado es aquel que tiene lugar “(...) ante casos de especial y notoria acreditación (flagrancia, libre confesión, registros televisivos o de otra índole tecnológica que reproduzcan fielmente lo acontecido) las habituales solemnidades probatorias y aun la misma discusión carecerían de sentido” (pp. 435-436). Sin duda alguna, este planteamiento adquiere gran relevancia si se considera que solamente deben tramitarse bajo este procedimiento, aquellos comportamientos o casos que puedan ser calificados como especiales y de notoria acreditación. Aunque la autora no es mucho más amplia la explicación de qué entender por casos especiales o de notoria acreditación, claramente implica, por diferentes medios probatorios, la realización efectiva de dicha conducta y por ende la vulneración concreta del bien jurídico tutelado.

Ahora, lo claro es que en efecto, el procedimiento abreviado supone una modalidad de los procedimientos especiales, que reduce sustancialmente los términos con respecto al ordinario, y que se manifiesta para determinados hechos delictivos que por su naturaleza y gravedad, pueden ser tratados de forma más simple. No obstante ello, les corresponde a los ordenamientos jurídicos procesales penales delimitar la verdadera esencia conceptual de este tipo.

1.6 El procedimiento abreviado y los sistemas de enjuiciamiento

Un aspecto de gran relevancia es poder identificar según los rasgos que delimitan la esencia del procedimiento abreviado, aquel sistema de enjuiciamiento se adecua más. Para ello es pertinente realizar algunas observaciones en torno a esta última institución. Los sistemas de enjuiciamiento constituyen etapas por las que han transitado las reglas y normas aplicadas al proceso penal. Responde a las

exigencias, formalidades y principios que eran observados en diferentes etapas históricas y por medio de las que se lograba la administración de justicia. En esencia se han conocido dos sistemas de enjuiciamiento, el inquisitivo, y el acusatorio, aunque otros autores han establecido que la contemporaneidad no existe ni uno ni otro de manera pura sino que se han adoptado caracteres de ambos, por lo que también es posible hablar de un sistema de enjuiciamiento mixto.

Sobre el primer sistema, ello es, el inquisitivo, Ferrajoli (2018) refiere que debe ser entendido como aquel proceso:

(...) donde el juez procede de oficio la búsqueda, recolección y valoración de las pruebas, llegándose al juicio después de una instrucción escrita y secreta de la que están excluidos o, en cualquier caso, limitados la contradicción y los derechos de defensa. (p. 564)

Teniendo ello como fundamento, el sistema inquisitivo, se caracterizaba por la intervención de oficio del juez, de forma tal que un proceso puede iniciarse sin la realización de la acusación, ya que el juzgador tiene la iniciativa para hacerlo. También se identifica con la secretividad, escritura, la unidad en la postura entre el juzgador y el acusador, la posibilidad que le confería el ordenamiento al juez para ser libre en la investigación y búsqueda de los elementos probatorios de culpabilidad, la restricción al procesado y su defensor de poder presentar o promover elementos de prueba, la aplicación como regla de la prisión provisional, la dirección del procedimiento por un juez, el inicio del procedimiento por la mera sospecha o rumor del cometimiento de un hecho delictivo sin necesidad de que exista una denuncia, una acusación formal, la postura de que el procesado es el objeto del proceso y no un sujeto, el hecho de que la confesión y por ende la comisión de los hechos y su participación en ella por parte del procesado, es prueba tasada, entre otros. (Armenta, 2012)

Por su parte el sistema acusatorio según expuso el académico Picado Vargas (2012) se trata de:

(...) un método bilateral en el cual dos sujetos naturalmente iguales discuten pacíficamente en igualdad jurídica asegurada por un tercer imparcial que actúa al efecto de carácter de autoridad, dirigiendo y regulando el debate para, llegado el caso sentencia la pretensión discutida (...) aquel en cuya virtud se confía la actividad de las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los cuales aderezar la decisión del juez (...) se funda, por vía de negatividad, en la noción originaria y elemental de que los

órganos del poder público no deben ir más allá de lo que anhelan los particulares en aquellas cuestiones donde sólo procuran dilucidar -con pretensiones y resistencia- un interés propio y privado. (p. 64)

Es así y como muy bien expone Armenta (2012) este sistema se caracteriza porque la acusación en el orden penal es la que enerva la acción de la función judicial no permitiendo que el proceso se inicie de oficio en la amplia mayoría de las figuras delictivas; también se establece una distinción efectiva y notoria entre el papel que deben jugar el acusador, el juez y la defensa y su procesado; se prohíbe terminantemente a los funcionarios judiciales iniciar o darle continuidad de oficio, a los expedientes por la comisión de hechos delictivos; hay una efectiva participación de la víctima quien puede erigirse como acusadora particular; la acusación constituye el pilar fundamental sobre el que gira el proceso; debe haber una correspondencia entre la acusación que fuere realizada y la sentencia dictada por el juez.

También debe haber un pronunciamiento concreto sobre la reparación integral a la víctima; las acciones investigativas se encuentran a cargo de órganos investidos con esta autoridad y que son diferentes al juez; se garantiza el principio de oportunidad al fiscal, quien tiene en virtud de ello, la potestad de decidir si ejercitar la acción penal o no; se caracteriza por la existencia de la libertad del acusado hasta tanto se determine su culpabilidad; el juez sólo debe limitar su motivación y valoración a los hechos que han sido incorporados, demostrados o contradichos dentro del proceso, estando también vinculado a la pretensión de las partes.

Finalmente, se tiene el sistema mixto, que como bien expone el académico mexicano García Ramírez (2016) es el que más ha proliferado en las últimas décadas, y lo que hace es tomar elementos del sistema inquisitivo y del acusatorio, e incorporarlas al proceso penal. En este sentido afirma que los principales elementos distintivos de este sistema, se dan por la existencia de una división de la instrucción, una propiamente instructiva y otra de audiencia o de juicio oral; también porque hay un predominio de la escritura en la etapa instructoria y de la oralidad en audiencia; en la primera etapa, se realizan acciones que tienen valor preparatorio en el juicio; existe una adecuada diferenciación de las funciones y potestades de los sujetos procesales; se garantiza a toda costa el ejercicio del derecho a la defensa; el juzgador no es un mero observador del proceso, sino que tiene relación directa con

las partes y los elementos de prueba que son aportados por estos, dirigiendo cada una de las etapas.

Teniendo estos elementos en consideración, claramente se evidencia que en la actualidad la amplia mayoría de los sistemas de enjuiciamiento contemporáneos son mixtos, pues no se puede constatar la existencia de un sistema inquisitivo puro o acusatorio puro, sino que se han incorporado a los ordenamientos jurídicos procesales penales, elementos de ambos sistemas, generalmente lo mejor de cada uno de ellos.

La presunción de inocencia claramente es vulnerada, y así lo fue habitualmente, mientras se desarrolló el sistema inquisitivo. Es indudable que, el acusatorio ofreció desde todos los puntos, mayores garantías al procesado de que se le respetasen sus derechos. En el Ecuador, es claro que impera un sistema mixto, en el que hay rasgos del inquisitivo tales como la posibilidad de que determinados procesos se inicien de oficio o la realización de determinadas acciones dentro de un procedimiento determinado (arts. 175 numeral 2; 417; 436; 520; 521; 602; 640 numeral 6; 650; 652 numeral 10; 657 numeral 6); el predominio de la escritura, especialmente en la fase de instrucción del proceso aunque se encuentra presente en todo (arts. 5 numeral 11; 427; 428; 434; 465 numeral 1; 502 numeral 7; 560; 563 numeral 5; 575 numeral 4 inciso e; 578; 621, 622; 636; 640 numeral 5; 642 numeral 3). (Ecuador, Asamblea Nacional, 2014)

También, se materializan en el proceso penal ecuatoriano, normas o procedimientos especiales, por ejemplo, en el que se le limita el tiempo y los recursos al procesado y su defensor, para poder preparar su defensa y aportar medios de prueba (arts. 637; 640 numeral 1). También se ha podido evidenciar en la realidad nacional, un uso excesivo de la prisión provisional como medida cautelar. Es importante en este sentido, referir que en un estudio realizado entre los años 2014 al 2016 y que fuera publicado en el año 2018, por la Defensoría Pública del Ecuador, con el apoyo de Friedrich-Ebert-Stiftung – ILDIS y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), se comprobó que de la muestra seleccionada, el 95% de los procesados se les impuso prisión provisional, y solo el 12% del total tenía

realmente elementos que supusieran la existencia de planes de evasión a la justicia. (Ecuador, DPE, 2018)

Otro elemento relevante que ha sido tomado del sistema de enjuiciamiento inquisitivo es el hecho de que la declaración de la persona, su admisión de los hechos, es suficiente como para imponer una sentencia. Este es el caso de los procedimientos especiales, especialmente el abreviado, que exige esta condición para que el procesado se someta a las reglas del mismo (arts. 635 numeral 3). Como se evidencia, las reglas del procedimiento abreviado tal y como se encuentra establecido en la realidad jurídica ecuatoriana, aunque posee elementos del sistema acusatorio, posee innegables aspectos que lo relacionan con el inquisitivo, lo que indudablemente provee el espacio para que se atente contra derechos y principios fundamentales del debido proceso.

1.7 Elementos característicos del procedimiento abreviado

El Procedimiento Abreviado posee algunos elementos distintivos que suponen de forma clara, la vulneración o restricción de ciertos derechos y principios como es la presunción de inocencia. Narváez (2003) refiere que este tipo de procedimientos poseen un conjunto de elementos que lo distinguen del resto. Menciona, por ejemplo, el elemento temporalidad, porque como aspecto característico busca resolver el conflicto originado por la presunta vulneración de un bien jurídico tutelado, en el menor tiempo posible, lo que se hace a través de confesiones y acuerdos entre las partes y autorizadas por el juez.

También refiere el autor que opera para ciertos delitos. En este sentido afirma que el sometimiento a las reglas de este tipo de procedimiento, solo se da en ciertas infracciones, de forma tal que el ordenamiento jurídico establece ya sea por la materia o la cuantía, aquellos procesos que puedan regirse por las normas de referencia. También considera que se distingue por un aligeramiento procesal, ya que determinadas acciones de instrucción o momentos o fases procesales se eliminan o se desarrollan en tiempos muy reducidos, pues la naturaleza de las exigencias, como el aceptar los hechos, implica que es innecesario practicar otras diligencias.

En torno a esta idea, el ilustre jurista Zambrano Pasquel (Zambrano, 2009) ha referido que:

La característica fundamental del juicio abreviado es que no se observan los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, así como también no se lleva a cabo la reproducción de las pruebas, lo que se realiza es que una vez obtenida la confesión se aplica la pena evadiendo tácitamente todas estas garantías. (p. 36)

Esta idea expuesta por el académico ecuatoriano, resume claramente lo que distingue al procedimiento abreviado actual, pues si bien su análisis lo hace durante la vigencia de la norma procesal penal que fuere derogada en el año 2014 por el COIP, los fundamentos sustanciales de dicho procedimiento como se encontraban regulados en dicha norma, persistieron en el COIP. El investigador ecuatoriano Cornejo Aguilar (2016) afirma que el procedimiento abreviado actual, se caracteriza o distingue por cuatro elementos esenciales.

Un primer aspecto característico es en lo relacionado a la acción restrictiva. En ese sentido refiere el académico que, en el caso ecuatoriano el procedimiento abreviado solamente se aplica a aquellos delitos cuya pena máxima no exceda los diez años de pena privativa de libertad. También se caracteriza por relacionarse como una acción de orden convencional, pues depende del acuerdo al que arriben el Fiscal y el procesado, por medio de su abogado defensor, siempre y cuando el sujeto presunto comisor del hecho, acepte los mismos.

Otro elemento que distingue este tipo de procedimiento es el oficialismo. Según este autor, este aspecto se identifica a partir del hecho de que le corresponde al Fiscal, realizar la propuesta al procesado de someterlo a las reglas del procedimiento abreviado, negándole esta oportunidad a dicho individuo o su defensor. Finalmente, refiere que se debe caracterizar por una actividad y decisiva participación del procesado, porque sin que este admita los hechos y dé su consentimiento a someterse a las reglas del procedimiento en cuestión, no podría adoptarse el mismo.

1.8 Procedimiento abreviado y presunción de inocencia en la legislación y jurisprudencia ecuatoriana

En el Ecuador, como se ha identificado a lo largo del análisis que se ha realizado, tanto la presunción de inocencia como el procedimiento abreviado poseen suficiente desarrollo legal y jurisprudencial. En torno al procedimiento abreviado, si bien la Constitución ecuatoriana del año 2008 no establece nada de forma directa, si lo hace a través de varios fundamentos que justifican la aplicación de este tipo de procedimientos. Es así como en su artículo 75, se refiere al derecho de todas las personas de poder acceder de forma gratuita a la justicia y a la tutela efectiva sustentado en principios como la celeridad. En parecido sentido se pronuncia el artículo 169, que establece que el sistema procesal es el mecanismo por medio del que se ejecuta la justicia, y debe fundamentarse en principios como la celeridad y la economía procesal. (Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008)

Unido a ello, la Carta Magna establece la presunción de inocencia como garantía básica del debido proceso, cuando en el artículo 76 numeral 2, regula que debe presumirse inocente a toda persona, debiendo ser tratada como tal hasta que se declare la responsabilidad en la comisión de un ilícito por medio de una sentencia en firme. Ello posee gran relevancia porque el propio mandato constituyente les impone a los funcionarios de todos los niveles y de todas las competencias, a actuar con la debida diligencia en la garantía y protección de este derecho, de forma tal que toda persona debe conservar dicha cualidad mientras no exista un pronunciamiento de autoridad competente sobre su responsabilidad.

En este mismo orden de ideas, el COIP también se pronuncia adecuadamente sobre estas variables. De esta forma, en su artículo 5, referido a los principios que imperan en el proceso penal, en su numeral 4, se establecen la presunción de inocencia, estableciendo que cualquier persona conserva dicho estatus hasta que no se dicte una sentencia en su contra, debiendo ser tratado como tal en todo momento. Unido a ello, en sus artículos 634 numeral 1, y 635 al 639, regula todo lo relacionado con el procedimiento abreviado, en la forma y posturas que han sido analizadas a lo largo del estudio. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2014)

En torno a este tipo de procedimiento, la Corte Constitucional del Ecuador ha afirmado que:

(...) cabe indicar que la aplicación del procedimiento abreviado estuvo vigente en el Código de Procedimiento Penal y actualmente se encuentra reproducido en el Código Orgánico Integral Penal a partir del artículo 635, con la finalidad de humanizar la actuación procesal y la pena, y de esta manera obtener de ella una pronta y cumplida justicia que coadyuve a la solución de los litigios que se encuentran sustanciándose en la etapa intermedia o del juicio, a fin de propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados a la víctima y lograr la participación del procesado en la definición de su caso. (Ecuador, Corte Constitucional, 2015, p. 10) (p. 10)

La Corte Nacional de Justicia del Ecuador, también se ha pronunciado sobre este tipo de procedimiento, afirmando que:

Este procedimiento especial tiene sustento en la necesidad de que los juicios en materia penal tengan una respuesta ágil y socialmente aceptable en términos de calidad, mediante un procedimiento oral, rápido y eficaz, otorgando al conflicto penal una prosecución y solución distinta a la ordinaria, en aquellos delitos de baja penalidad o menos graves, haciendo posible una mediación directa entre el fiscal y el procesado, sin ignorar los derechos de las víctimas. Este procedimiento estará siempre sujeto a todas y cada una de las garantías y principios que orientan al procedimiento penal ecuatoriano, fundamentalmente en relación con los postulados constitucionales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, así como con aquellos expuestos en la jurisprudencia supranacional. (Ecuador, Corte Nacional de Justicia, 2018, p. 7)

Teniendo estos elementos jurisprudenciales sobre el procedimiento abreviado, es claro que en el Ecuador, ha existido ocupación y preocupación por parte de la jurisprudencia nacional en torno a estas dos variables. Lo cierto es que el hecho de que la propia Corte Nacional de Justicia en el propio documento referenciado refiera que la finalidad del procedimiento abreviado sea la de "(...) ofrecer al procesado, de forma oportuna, un beneficio atractivo, una pena rebajada, a cambio de aceptar el hecho que se le atribuye" (p. 12), es tema de gran inquietud.

El hecho de que el presunto comisor de un hecho delictivo, vea la posibilidad de acceder a determinados beneficios que derivan del abreviado, le influyen psicológicamente para aceptar los hechos tal y como los está atribuyendo el Fiscal. Es claro que pueden existir injusticias cuando el procesado por acceder a esos beneficios, admite cualquier cantidad de elementos fácticos descritos por el sujeto, en cuyo caso, estaría aceptando acontecimientos que no cometió, y todo por esos beneficios.

En torno a la presunción de inocencia, la Corte Constitucional del Ecuador ha fallado que:

(...) la presunción de inocencia, la misma que es definida como aquel principio jurídico penal que establece como regla la inocencia de la persona, conviene señalar que ello implica que solo a través de un proceso o enjuiciamiento justo, debe demostrarse la culpabilidad de la persona y solo así el juez podrá aplicarle la pena o sanción correspondiente. La presunción de inocencia se refiere al estado jurídico de inocencia de la persona, la cual se constituye en uno de los parámetros esenciales del garantismo procesal. No obstante, la presunción de inocencia legal (*iuris tantum*) no tiene carácter absoluto, porque los actos probatorios de cargo pueden modificar esta generalidad que, en todo caso, se torna inmutable cuando se dicta la sentencia condenatoria. Esto significa que el procesado no está obligado a presentar elementos probatorios para ratificar su inocencia: al contrario, estas actuaciones son de competencia de los operadores de jurídicos pertinentes para demostrar la culpabilidad del procesado, es decir se debe determinar en forma evidente la existencia de los elementos del delito y la relación de los mismos con el procesado, y solo así establecer su responsabilidad o no. (Ecuador, Corte Constitucional, 2017, pp. 7-8)

Como se evidencia en la realidad legal y jurisprudencial ecuatoriana, es claro que ambas variables son consideradas de forma acertada en el entorno nacional. Como bien se considera en este sentido, la presunción de inocencia supone una condición que posee toda persona mientras dura un proceso y que solamente se quebranta con la sentencia condenatoria, imponiendo a las instituciones tratar a dicho sujeto como inocente mientras no se dicte la referida sentencia. Pero en la realidad lo que sucede es otra cosa, y especialmente en el procedimiento abreviado. El hecho de que el procesado tenga que admitir los hechos, supone igualmente su responsabilidad en los mismos.

Es claro que, en el Ecuador, para que proceda este tipo de procedimiento, es necesario que se produzca la autoincriminación del procesado. Aunque pudieran existir criterios de que, la aceptación de los hechos no implica responsabilidad, no se comparte este criterio, pues como bien regula el COIP, una vez que se cumpla con este requisito, y se acepte en la audiencia por parte del juez dicha petición, en la misma se dicta la resolución, por lo que la admisión de los hechos por parte del procesado, supone la aceptación de sus responsabilidad y por ende, del resultado condenatorio que lleva aparejado, cuestión inaceptable.

CAPÍTULO II

PRESUNSIÓN DE INOCENCIA Y PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN LA CIUDAD DE CUENCA

2.1 Estadísticas sobre procedimiento abreviado en la Unidad Judicial Penal con sede en la ciudad de Cuenca, 2017

Un elemento de gran importancia en la investigación, es la determinación e incidencia de este tipo de procedimiento en la ciudad de Cuenca, a los efectos de que pueda observarse y analizarse el posible impacto que sobre la presunción de inocencia ha tenido este tipo de proceso. Para ello se solicitó información a la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística del Consejo de la Judicatura, la que ofreció la información importante. A continuación, se tabulan los datos de causas ingresadas y resueltas en procedimiento abreviado durante el año 2017.

Gráfico 1. Causas ingresadas Procedimiento Abreviado, cantón Cuenca, provincia Azuay, 2017

Año	Causas Ingresadas
2017	142
Total	142

Fuente: (Ecuador, Consejo de la Judicatura, 2017)
Elaborado por: Christian Manuel Valarezo Loayza

Teniendo en consideración esta información, es claro que fue importante el número de causas que se tramitaron por el procedimiento abreviado durante el año 2017 en el cantón Cuenca. Es así que, se conocieron aproximadamente 12 causas cada mes. El grupo de hechos delictivos varían; se conocieron expedientes que fueron sometidos a este procedimiento, por hechos delictivos como violación de propiedad privada (art. 181); robo (art. 189), hurto (art. 196), receptación (art. 202), daño al bien ajeno (art. 204), tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización (art. 220.1.b), ingreso de artículos prohibidos a centros de privación de libertad (art. 275), tenencia ilegal de armas (art. 360), violencia física intrafamiliar (art. 156), fraude procesal (art. 272), homicidio (art. 144), lesiones (art. 152.2), simulación de secuestro (art. 163), abuso sexual (art. 170.1), estafa (art. 186.1), suplantación de

identidad (art. 212), evasión de detenidos (art. 274), ataque o resistencia (art. 283), asociación ilícita (art. 370), Violencia psicológica intrafamiliar (art. 157), y accidente de tránsito con daños materiales (art. 380.1). (Ecuador, Consejo de la Judicatura, 2017)

Como se evidencia, hay un cúmulo de figuras delictivas que han sido tratadas por medio del procedimiento abreviado durante este periodo. Un amplio espectro de ilícitos han sido considerados en este periodo, lo que indica que, teniendo en cuenta el porcentaje de conocimiento mensual de causas bajo este tipo de procedimiento, implica que el procesado o procesados en las 142 causas, consintieron expresamente someterse a las reglas del mismo, admitiendo para ello los hechos que se le atribuyeron por el fiscal.

Unido a ello, en el mismo periodo se encuentran los datos referidos a la cantidad de causas que han sido resueltas.

Gráfico 2. Causas resueltas Procedimiento Abreviado, cantón Cuenca, provincia Azuay, 2017

Año	Causas Ingresadas
2017	138
Total	138

Fuente: (Ecuador, Consejo de la Judicatura, 2017)

Elaborado por: Christian Manuel Valarezo Loayza

De esta información se puede corroborar que la equivalencia de causas ingresadas y resueltas en este periodo, son casi equiparables, teniendo en consideración que se conocieron y tramitaron un total de 142 y se resolvieron 138, o sea, el 97%. Claramente estos datos no coinciden totalmente teniendo en consideración que puede haber causas que ingresaron a finales del mes de diciembre del año 2017 y por razones lógicas de procedimiento y temporalidad, fueron resueltas en el año siguiente.

No obstante, de los datos que han sido analizados, hay dos aspectos esenciales que son relevantes para el estudio que se realiza. Primero, el procedimiento abreviado sin duda alguna es una modalidad importante para dotar al

sistema de justicia penal ecuatoriano de mayor celeridad y eficacia en términos procesales, pues la totalidad de causas que se ingresaron por ese tipo de procedimiento lograron resolverse dentro del mismo año, lo que indica que el procesado tuvo certeza de su situación jurídica en periodos relativamente menores al procedimiento tradicional.

El otro elemento de relevancia es que, aunque se resolvió el asunto de forma rápida, también es cierto que, esa cantidad de procesados tuvo obligatoriamente que someterse a las reglas del procedimiento, por lo que tuvieron que aceptar o admitir el hecho que se le estaba imputando por el fiscal, lo que sin duda alguna quebranta la presunción de inocencia porque, desde la etapa previa a la resolución judicial, ya se estaba dando por hecho de que, en efecto, los procesados cometieron los ilícitos, lo que sin duda, pone en tela de juicio la legitimidad del procedimiento en sí.

2.2 Selección y análisis de procesos judiciales del segundo semestre del 2017, de la Unidad Judicial Penal con sede en Cuenca, tramitados por procedimiento abreviado

Como parte de la revisión documental que forma parte de la metodología de esta investigación, es necesario realizar el análisis de algunos procesos que se han resuelto en la Unidad Judicial Penal Cuenca. Para ello, se han elegido cuatro procesos de procedimiento abreviado que han sido conocidos, tramitados y solucionados en dicho órgano judicial, con la finalidad de comprender mejor los elementos distintivos de este tipo de procedimiento.

2.2.1 Proceso No. 01283-2017-01032 Unidad Judicial Penal Cuenca

Que en fecha 14 de mayo de 2017, el procesado fue aprehendido toda vez que, en esa misma fecha, se presentó ante los padres de su ex conviviente en estado de embriaguez, insultándoles. Que, existiendo dos boletas previas de auxilio en su contra, una vez que se llamó a la policía, se procedió a detenerlo. Que el 23 de mayo de 2017 la fiscal actuante solicitó que se convoque a audiencia para discutir la admisibilidad de procedimiento abreviado. (Cuenca, Unidad Judicial Penal, 2017)

Que el 24 de mayo de 2017 se convoca a la audiencia oral, pública y contradictoria, en la que se le pregunta al procesado si se encuentra conforme con las reglas del

procedimiento y se le advierte sobre las consecuencias del mismo, recibíéndose una respuesta afirmativa. El abogado defensor ratifica que se cumplen todos los requerimientos para que se tramite el procedimiento abreviado y que el procesado conoce las reglas y consecuencias jurídicas de someterse a dicho procedimiento, aceptando la pena privativa de libertad y los hechos que se le imputan. Agrega que, al procesado se le han respetado todos sus derechos.

En este sentido, el juez después de hacer la observación de que, en efecto, se cumplen con las exigencias legales para procesar al acusado por el procedimiento abreviado, principalmente que el procesado ha admitido los hechos que se le han imputado y se ha acreditado por parte del defensor de que, dicho consentimiento ha sido voluntario y libre, se procede a dictar una resolución que en el caso concreto es declarar la responsabilidad del procesado por el delito que se le imputa y condenarlo a pena privativa de libertad.

2.2.2 Proceso No. 01283-2017-00837 Unidad Judicial Penal Cuenca

Este caso lo tramitó y resolvió la Unidad Judicial Penal Cuenca. El hecho radica en que, el 25 de abril de 2017, ocasión en que dos patrulleros se encontraban patrullando, identifican al procesado con una actitud sospechosa y bultos en sus partes íntimas, siendo trasladado a la UPC Batán, procediéndose a realizar un registro encontrando tres fundas plásticas con indicios de una sustancia vegetal verdosa siendo marihuana (76 gr.) y cocaína (11 gr.). Además, se le encontró dinero y otras pertenencias, procediéndose a la aprehensión. (Cuenca, Unidad Judicial Penal, 2017)

Teniendo ello en consideración, el hecho delictivo tipifica la tenencia y posesión ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización reconocida en la letra b numeral 1 del artículo 220 COIP. Teniendo ello como fundamento, el juzgador analiza los requisitos de admisibilidad del procedimiento abreviado. De esta forma afirma que, el procedimiento abreviado obedece a la aplicación del principio de oportunidad que tiene el fiscal y de exclusividad en el ejercicio de la acción penal, lo que le permite proceder a la negociación en el proceso penal.

El juez afirma que, a través del procedimiento abreviado, se hacen efectivos los principios constitucionales de inmediación, celeridad, eficacia, concentración, con

ello sin duda el Estado busca una justicia rápida, oportuna, sin dilaciones, respuestas inmediatas de los órganos judiciales. De esta forma, el órgano constata el cumplimiento de las exigencias legales necesarias para admitir este procedimiento, o que hace a través de la escucha oral y pública del procesado de su aceptación con carácter libre, voluntaria e informada del hecho fáctico que le es atribuido por la fiscalía, consintiendo además la aplicación de este procedimiento y que se encuentra conforme con la pena acordada. Unido a ello constata de parte del defensor que, en efecto, el procesado consintió someterse a dicho procedimiento de forma libre, sin que se vulneraran sus derechos fundamentales.

Visto ello, el juzgador, después de hacer los análisis doctrinales, legales y jurisprudenciales de pertinencia, se pronuncia sobre la admisión del procedimiento abreviado, aceptando la pena que fue solicitada por el fiscal y previamente convenida con el procesado, declarando la culpabilidad del mismo e imponiéndole una pena privativa de libertad, así como la multa y lo referente a la reparación integral.

2.2.3 Proceso No. 01283-2017-00135 Unidad Judicial Cuenca

Este caso fue conocido por el Tribunal de Garantías Penales del cantón Cuenca. Que en fecha 18 de enero de 2017, se recibió la denuncia por un ciudadano de que sus pertenencias le habían sido robadas por dos sujetos, dando la descripción de los mismos, por lo que se inició una persecución que dio con la captura del procesado, Conforme a ello, se procedió a imputarle el, delito de Robo del artículo 189 del COIP, por lo que el fiscal, solicitó que se imponga una pena privativa de libertad que ha sido previamente convenida con el procesado y la defensa, así como lo relacionado con los daños y perjuicios, los que deberá pagar antes de extinguir la pena principal. (Cuenca, Tribunal de Garantías Penales, 2017)

Adicional, el defensor expresó que el procesado ha consentido someterse de forma libre y voluntaria a este procedimiento, lo que se hizo constatando que no se ha vulnerado ninguno de sus derechos constitucionales, aceptando de esta forma la pena propuesta por el fiscal y el monto por daños y perjuicios. Todo ello fue constatado por el juzgador, quien le pregunta al procesado si en efecto, conoce las

reglas del procedimiento abreviado, la pena a imponérsele, lo referente a los daños y perjuicios y si admite todos y cada uno de los hechos atribuidos por el fiscal.

Después de adecuar cada uno de estos hechos a los fundamentos jurídicos que constan en el Código Orgánico Integral Penal, en torno a las exigencias para someter al procesado al procedimiento abreviado, el juzgador dicta una resolución condenatoria en base al convenio al que arribaron el fiscal y el procesado, siendo admitido, por ende, por el juez, realizando los pronunciamientos del caso.

2.2.4 Proceso No. 01283-2017-04379 Tribunal de Garantías Penales Cuenca

El caso que se expone a continuación, también fue conocido por el Tribunal de Garantías Penales con sede en Cuenca. Que en fecha 18 de diciembre de 2016, en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur Turi, cuando los oficiales de policía se encontraban de servicio en el filtro de seguridad, registraron a la procesada, encontrándole en sus partes íntimas una envoltura de látex que contenía una funda con cocaína (93 gr.), tipificando por ello el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en la modalidad de alta escala, según lo regulado en el art. 220 numeral 1 letra c del COIP. (Cuenca, Tribunal de Garantías Penales, 2017)

Teniendo ello en consideración, el juzgador analiza que, ante la solicitud del fiscal de continuar el proceso como abreviado, se considera que, el hecho delictivo puede ser configurado dentro de las exigencias establecidas en el artículo 635, pues el delito imputado no excede la pena de diez años de privación de libertad. En este sentido, se escucha a la procesada, refiriendo aceptar someterse a las reglas de dicho procedimiento, así como admitir los hechos que se le atribuyen, habiendo manifestado ello sin que se le hubieren vulnerados sus derechos fundamentales.

Teniendo ello en consideración, el juzgador analiza la finalidad y ventajas del procedimiento abreviado, refiriendo la celeridad que se logra con ello, analizando que en el caso en cuestión, al haberse negociado y convenido la pena entre el fiscal y la procesada, y habiendo constatado que se cumplen todas las exigencias del caso, se aprueba la solicitud y en consecuencia, se impone la sanción propuesta, de privación de libertad, más los pronunciamientos del caso que fueron necesarios y pertinentes.

2.3 Crítica valorativa del principio de presunción de inocencia en los procesos judiciales analizados

De los casos que han sido analizados, existen varios elementos que son de gran relevancia y que aportan sin duda algunos aspectos interesantes al estudio que se realiza. Un primer elemento es el hecho de que, los cuatro casos que han sido expuestos, constituyen un porcentaje básico del conglomerado de asuntos que en el año 2017, fueron tramitados y resueltos en el cantón Cuenca en procedimiento abreviado. No obstante, a partir de ello se pueden extraer experiencias que constituyen una tendencia en la actuación de los jueces tanto de la Unidad Judicial Penal como del Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Cuenca.

Unido a ello, es importante señalar que, los jueces para admitir el procedimiento abreviado, realizan un análisis, casi mecánico, del cumplimiento en la realidad de las exigencias y requerimientos que establece el COIP. En este sentido, la primera referencia que hacen es al delito y el marco penal que establece, para conocer si en efecto se ubica por debajo de los diez años de privación de libertad. Adicional a ello, también analizan brevemente, el cumplimiento de los demás requerimientos referidos a la aceptación por parte de los procesados del sometimiento a las reglas de dicho procedimiento, así como a la aceptación de los hechos que le son atribuidos por el fiscal, lo que se constata del propio dicho en la audiencia de juzgamiento. Por medio de lo que manifiesta el abogado defensor, se verifica si dicha aceptación, se obtuvo o no cumpliendo las exigencias legales y sin atentar contra los derechos fundamentales.

También se ha podido evidenciar que, principalmente en el Tribunal de Garantías Penales, se realiza un análisis por parte del juzgador, de las ventajas y relevancia que posee aplicar el procedimiento abreviado, estructurándolo como un mecanismo que ayuda a la celeridad y prontitud en la aplicación de la justicia penal. Por medio de una motivación adecuada en la que sustenta la necesidad de aplicar dicha institución en la doctrina e incluso en la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, es claro que los jueces actúan de forma adecuada justificando la pertinencia de aplicar dicho procedimiento.

No obstante, los casos que se han analizado constituyen desde el punto de vista de este estudio, ejemplos de que, en efecto, se atenta contra la presunción de

inocencia. Como se puede observar en los procesos analizados, los jueces se centran en observar que los requerimientos formales sean cumplidos, por medio de preguntas concretas al procesado de si está de acuerdo con someterse a dicho procedimiento y si admite los hechos fácticos atribuidos por el fiscal. Es decir, lo que hace el juzgador es cerciorarse concretamente de ello, lo que supone desde el momento en que el fiscal presenta dicha solicitud y es admitida por el juez, un quebrantamiento de la presunción de inocencia.

El juzgador en estos casos, no interroga al procesado sobre cómo ocurrieron los hechos, de forma tal que pueda constatar que en efecto, los hechos tal y como los ha narrado el fiscal, coinciden con el argumento expuesto de forma oral por el procesado. Indiscutiblemente el hecho de que el juzgador solo se limite a ello, supone que le da total credibilidad a lo planteado por el fiscal, sin interesar los elementos ocultos que pudieron haber hecho que el procesado los admitiera, aunque ello solo suponga para acceder a los beneficios de dicho procedimiento.

Esta realidad que puede determinarse a partir del análisis de las resoluciones de casos de esta naturaleza, son inquietantes. El hecho de que los jueces, por terminar rápido un proceso, ni siquiera verifiquen que los elementos presentados por fiscalía sean suficientes – veraces para la imputación de una delito; de forma tal que solo obtengan la certeza por lo que narra el fiscal y en base a la afirmación expresa del procesado, ubica a dicho procedimiento en una situación en la que, la formalidad es su punto sustancial pero igual, su principal debilidad.

Si bien es cierto que en este tipo de procesos se logra mayor celeridad, es claro que los jueces dan por cierto lo expuesto por el fiscal, pues ha sido admitido por el procesado, sin realizar ninguna otra actividad para comprobar si es verdad. La absoluta credibilidad que posee el juzgador con respecto al acuerdo que han llegado, es un tema serio y que debe preocupar a la sociedad y a los operadores de justicia en el país. No se trata de discrepar o desconfiar de las circunstancias en las que el procesado llegó al acuerdo con el fiscal, se trata de lograr presumir la inocencia del procesado hasta el último momento, de forma tal que, cuando se quebrante, sea indiscutiblemente porque no queda ni la más mínima duda de que, el procesado cometió los hechos en la forma y contenido que han sido expuestos por

el fiscal, caso contrario, como ocurre en los casos analizados, la presunción de inocencia está siempre, en duda.

2.4 Análisis de las encuestas e instrumentos aplicados

2.4.1 Encuesta aplicada a abogados de la Unidad Judicial Penal Cuenca

Pregunta 1. ¿Considera usted que la admisión del hecho fáctico que se le atribuye al procesado, implica una forma de autoincriminación?

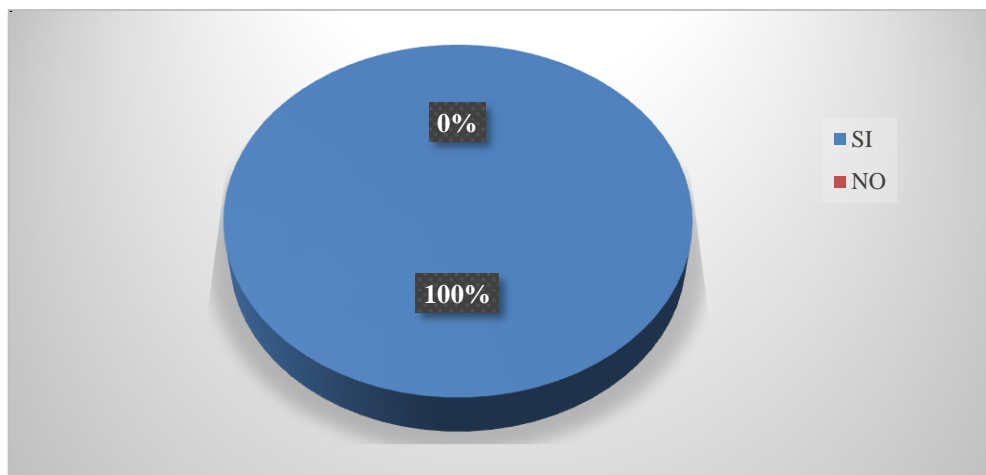
Tabla 1.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	220	100%
NO	0	0%
TOTAL	220	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 3.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: La interrogante que se analiza tiene como finalidad conocer el criterio que tienen los abogados en torno a si, la exigencia de que el procesado admita los hechos que se le imputan, implica una modalidad de autoincriminación, el 100% de los encuestados coinciden en que así es.

INTERPRETACIÓN: La reacción que la amplia mayoría de los abogados han tenido a esta pregunta, indica una consideración generalizada de que en efecto, si para acceder a esta forma de procedimiento, es imprescindible que el individuo procesado, admita su culpa, que es lo mismo que reconocer los hechos en la forma en la que el Fiscal se los imputa, entonces ello supone una forma de que el procesado se auto incrimine para poder acceder a cualquier beneficio del procedimiento.

En este sentido son importantes los fundamentos de varios abogados. Diversos han sido los criterios que han sido referidos por estos profesionales. Mientras algunos sostienen que la admisión de los hechos implica un juicio a priori de culpabilidad, otros afirman que con ello se desnaturaliza el precepto constitucional de que es el Fiscal quien tiene que romper con la presunción de inocencia, pero si es que el procesado es quien admite los hechos, entonces es el propio procesado, quien quebranta ese principio, siendo absolutamente contraproducente con el debido proceso y los principios del proceso penal democrático.

Pregunta 2. ¿Considera usted que, la propuesta de someterse al procedimiento abreviado y sus beneficios, pudiera implicar que el procesado acepte toda la imputación, aunque algunas circunstancias no sean verídicas ni estén probadas?

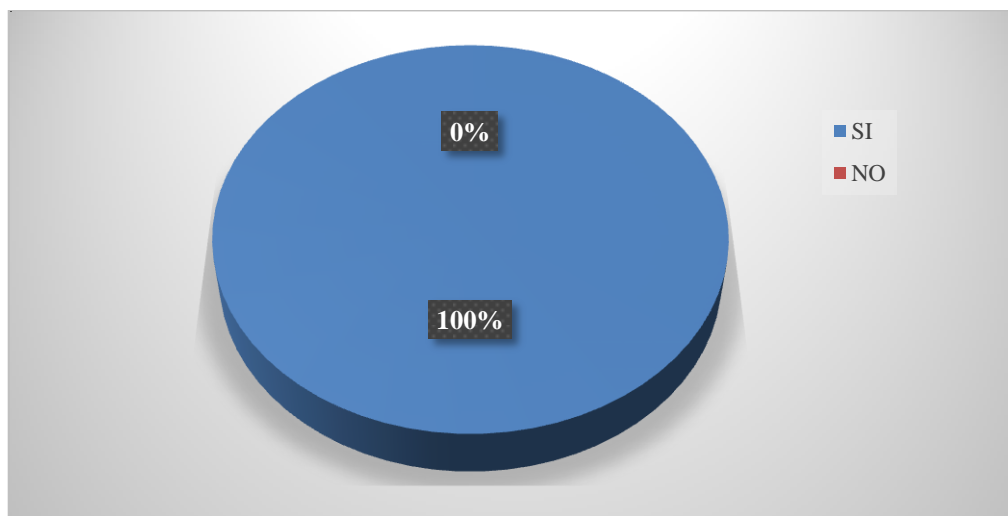
Tabla 2.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	220	100%
NO	0	0%
TOTAL	220	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 4.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: El objetivo de esta interrogante es conocer si, a juicio de los abogados encuestados, los beneficios que derivan de la aceptación del procedimiento abreviado, supondría que, el procesado, admitiere hechos que realmente no cometió, para aminorar la responsabilidad en otros hechos, a lo que el 100% de los encuestados respondieron que sí.

INTERPRETACIÓN: Realmente la respuesta integral que los encuestados le dieron a esta pregunta, es de gran importancia, porque evidencia que, ciertamente para acceder a todos los beneficios y ventajas de este procedimiento, muchas veces los procesados admiten circunstancias que en realidad no cometieron. El hecho de que los abogados consideren ello, indica que, como quiera que se trate de abogados penalistas con amplia experiencia, en muchas ocasiones han tenido que conciliar o convenir con sus clientes procesados en esta cuestión, porque los beneficios serían más ventajosos que no hacerlo.

Pregunta 3. ¿Considera usted que, las reglas que rigen en el procedimiento abreviado en el COIP, atentan contra la presunción de inocencia del procesado?

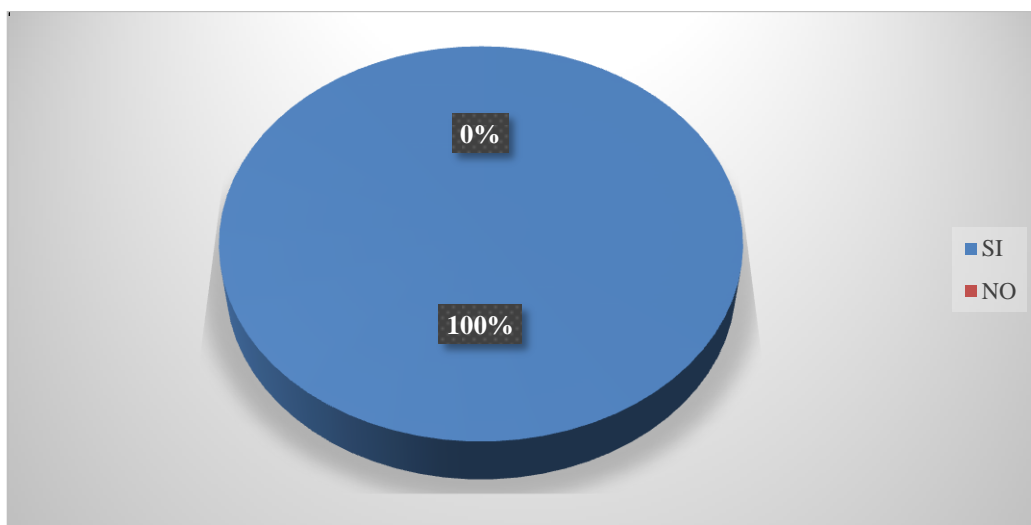
Tabla 3.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	220	100%
NO	0	0%
TOTAL	220	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 5.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: El objetivo de la pregunta que se analiza, es conocer la postura de los abogados sobre el impacto que las reglas del procedimiento abreviado tienen sobre el principio de presunción de inocencia, a los que el 100% de los abogados encuestados coinciden en que sí es afectado.

INTERPRETACIÓN: El resultado del análisis de esta interrogante es relevante. El hecho de que la totalidad de los abogados coincidan en el hecho de que, en sentido general las reglas del procedimiento abreviado vulneran o afectan de una u otra

forma el principio de presunción de inocencia, implica una consideración y percepción desde la práctica profesional que en efecto, aplicar dichas reglas restringe la posibilidad de que el procesado sea tratado como inocente, lo que es quebrantado incluso antes de que el juez dicte una resolución condenatoria.

En este sentido, la totalidad de los abogados coinciden en el hecho de que ante la realidad que supone que la Fiscalía no tiene que presentar elementos probatorios que demuestren la responsabilidad del procesado en los hechos, bastando con que este acepte lo que se le imputa, desde ese momento, se está rompiendo la presunción de inocencia, quien por la doctrina, solamente se termina con la declaración de culpabilidad que adopta el juez en su resolución, sin embargo, en este tipo de procedimientos, dicha condición se realiza de forma previa y de esa manera es aceptada por el juez.

Pregunta 4. ¿Considera usted que, es necesario realizar un análisis constitucional del procedimiento abreviado en el Ecuador?

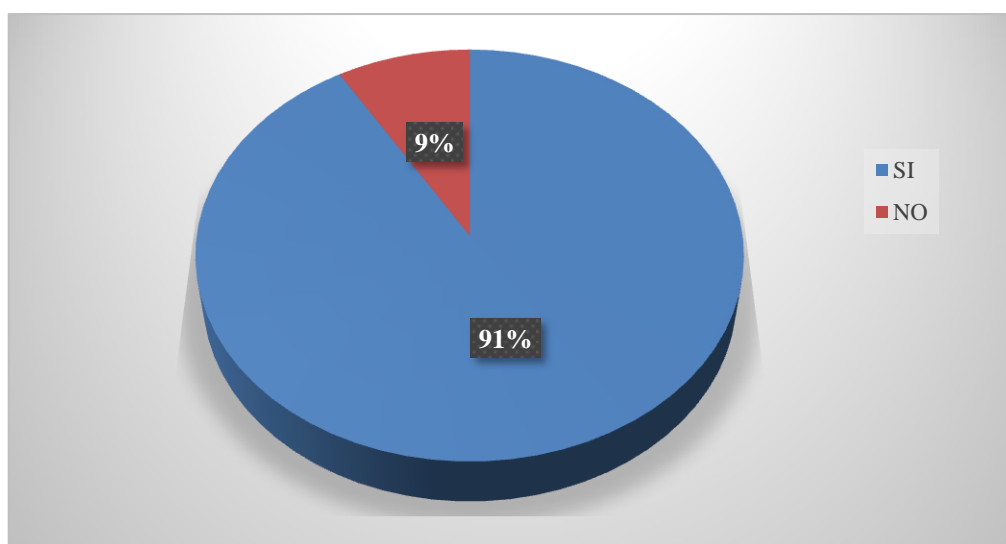
Tabla 4.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	201	91%
NO	19	9%
TOTAL	220	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 6.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: La interrogante que se analiza tiene como finalidad, conocer el criterio de los abogados encuestados en torno a si, teniendo en consideración la afectación que se produce a derechos y principios fundamentales en el procedimiento abreviado, es necesario realizar una evaluación de la constitucionalidad de las reglas que informan dicho procedimiento, a los que el 91% de los encuestados contestaron que sí; mientras que el 9%, opinó lo contrario.

INTERPRETACIÓN: El hecho de que la amplia mayoría de los encuestados consideren que es necesario someter a una evaluación de constitucionalidad las reglas del procedimiento abreviado que afectan derechos y principios fundamentales como el de defensa y presunción de inocencia, supone una percepción desde la defensa técnica que, en efecto, cumpliendo las exigencias de este procedimiento se atenta contra los referidos presupuestos constitucionales, lo que invalida la eficacia y validez de las actuaciones dentro de este tipo de procedimiento, aunque ello sea para obtener mayores beneficios.

En este sentido, los abogados que se pronunciaron a favor de que sean revisadas estas normas, coinciden en que como quiera que la norma fundamental ecuatoriana tiene que ser respetada, no se puede justificar que, por dotar a ciertos procedimientos de mayor celeridad, puedan restringirse o afectarse derechos de los procesados como la presunción de inocencia y la autoincriminación. También es importante señalar que, el abogado que considera que la revisión constitucional de estos preceptos no es necesario, considera que, como quiera que el procesado emite su juicio, su voluntad de forma libre, entonces es necesario respetarle dicha consideración; cuestión que no se comparte, porque en el proceso penal, no puede dejarse a la voluntad de procesado la realización de un acto, si esa acción vulnera la Carta Mana, pues nadie, ni el Fiscal, Juez o procesado, están por encima de lo que dicta la Constitución.

2.4.2 Encuesta realizada a Jueces de la Unidad Judicial Penal Cuenca

Pregunta 1. ¿Considera usted que la admisión del hecho fáctico que se le atribuye al procesado, implica una forma de autoincriminación?

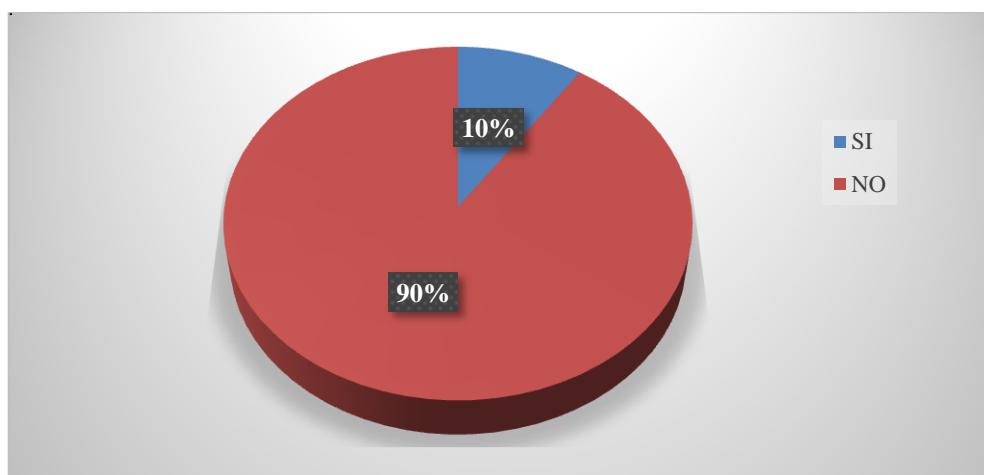
Tabla 5.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	2	10%
NO	19	90%
TOTAL	21	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 7.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: Ante la necesidad de conocer el criterio de los jueces encuestados en torno a si la aceptación del hecho en este tipo de procedimientos implica autoincriminación, el 10% de los jueces coinciden en que así es; mientras que el 90%, opina que no.

INTERPRETACIÓN: Es realmente interesante el hecho de que la amplia mayoría de los jueces considera que no existe vulneración del principio de autoincriminación. No obstante, es importante que una décima de la muestra considere que si se vulnera el

referido principio. En este sentido, los jueces que defienden esta realidad consideran que tradicionalmente ha sido considerado por la doctrina y la jurisprudencia que el reconocimiento de los hechos debe ser considerado como una circunstancia atenuante, lo que supone que deba ser considerado como una condición que el juzgador deba tener en cuenta para aminorar la severidad de la sanción, pero nunca como una condición para ser procesado por el hecho delictivo presuntamente cometido.

Por otra parte, ciertamente la amplia mayoría de los encuestados coincide en que no hay afectación, porque la manifestación de la voluntad del procesado de aceptar los hechos se realiza respetando su libertad y criterio, de forma tal que, siendo asesorado por su abogado defensor, y cumpliéndose lo establecido en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referido a las garantías judiciales, en la obtención de esta aceptación de los hechos que se le imputan, no se vulnera ningún derecho ni principio del debido proceso, por lo que la declaración de hechos que realiza el procesado, tiene plena validez.

De esta forma, el procesado conoce las consecuencias jurídicas de aceptar los hechos, por lo que al hacerlo, de forma voluntaria y libre, sin ningún tipo de coacción o presión, está expresando su libre criterio. Aunque ello es cierto, no puede ser fundamento suficiente como para otorgar validez a la aceptación de los hechos como requisito para ser procesados y claramente condenado. Se comparte el criterio de los jueces que apoyaron el sí de la autoincriminación, porque en efecto, el reconocimiento de los hechos debe ser una circunstancia atenuante, y nada más.

Pregunta 2. ¿Considera usted que, la propuesta de someterse al procedimiento abreviado y sus beneficios, pudiera implicar que el procesado acepte toda la imputación, aunque algunas circunstancias no sean verídicas ni estén probadas?

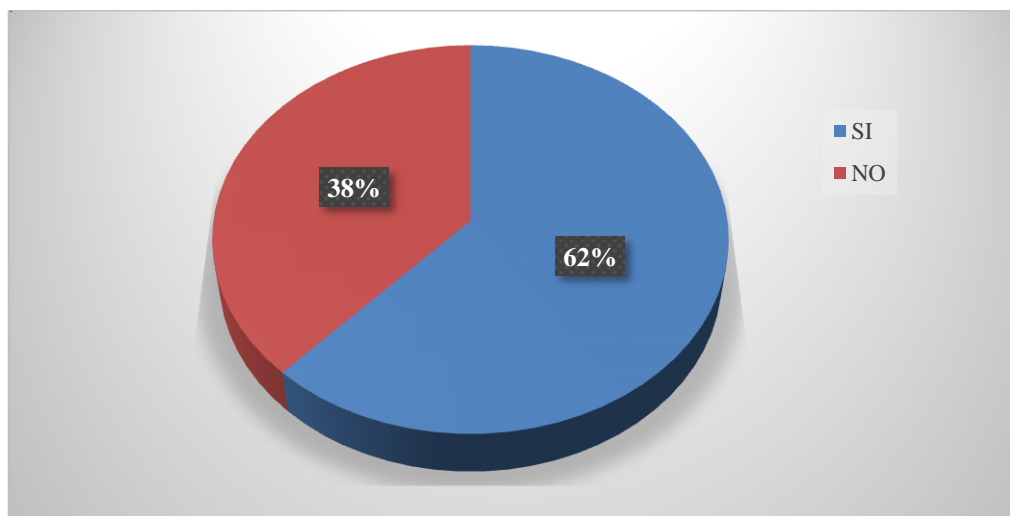
Tabla 6.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	13	62%
NO	8	38%
TOTAL	21	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 8.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: Como consecuencia de la pregunta que se realiza y ante la necesidad de conocer si en efecto, el reconocimiento de los hechos por parte del procesado para acceder al procedimiento abreviado, pudiera implicar el reconocimiento de hechos y circunstancias que no son reales ni comprobadas, el 62% de los jueces consideran que si pudiera suceder; mientras que el 38% opinó que no.

INTERPRETACIÓN: La reacción de los jueces encuestados a esta interrogante realmente es muy importante. Los jueces que consideran que no, sustentan su consideración en el hecho de que, en este tipo de asuntos, se cuenta con un defensor que tiene que observar la veracidad de como se le imputa en base a los hechos y condiciones del caso; pero también se encuentra el juez que, aun cuando se le solicita llevar el proceso por el procedimiento abreviado tiene que realizar una revisión de legalidad. También expresan que no es posible que el procesado admita hechos que no haya cometido.

No obstante, la amplia mayoría de los jueces encuestados respondieron que esta realidad sí pudiera implicar que, por acceder a los beneficios del abreviado, se admitieran hechos o circunstancias que no fueran del todo ciertos, por lo menos en la forma en la que el Fiscal los ha narrado. Estos jueces sustentan su dicho en el hecho de que, en todo proceso penal, se debe comprobar los hechos que son imputados a una persona, y solo cuando ello se hace se logra descubrir la verdad material que es la finalidad del proceso penal y con ello, a su autor, cuestiones que son alteradas en el procedimiento abreviado, por lo que esta posibilidad es real. Esta postura indica que, según la experiencia de los jueces, es claro que, aunque no quiera decirse ni afirmarse que ello sucede, la pregunta está dirigida a la existencia del riesgo, lo que es real.

Pregunta 3. ¿Considera usted que, las reglas que rigen en el procedimiento abreviado en el COIP, atentan contra la presunción de inocencia del procesado?

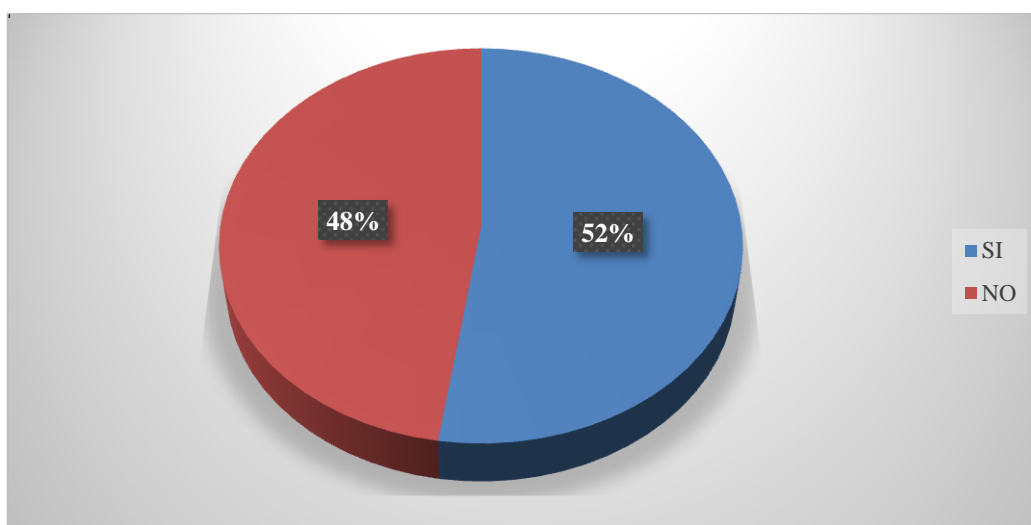
Tabla 7.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	11	52%
NO	10	48%
TOTAL	21	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 9.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: El objetivo de la pregunta que se analiza, es conocer si desde la perspectiva de los jueces encuestados, las reglas en sentido general que posee el procedimiento abreviado en el COIP, afectan la presunción de inocencia, a los que el 52% de los encuestados opinaron que sí; mientras que el 48%, respondió lo contrario.

INTERPRETACIÓN: El resultado del análisis de esta interrogante realmente es importante. Aunque los porcentajes están muy cercanos, lo cierto es que más de la

mitad de los jueces encuestados coinciden en que en efecto, el hecho de que el procesado desde etapas tempranas en el procedimiento, pueda aceptar los hechos que le son imputados por el Fiscal, y que esa admisión suponga un elemento suficiente para condenarlo, implica una afectación sustancial del principio de presunción de inocencia. Según el dicho de estos jueces, es ampliamente adoptado y establecido que este principio solamente puede quebrantarse por la resolución condenatoria de un juez, lo que no sucede en el procedimiento abreviado porque, desde etapas previas, el procesado al admitir su participación en los hechos supone desde ese momento, una condena segura.

No obstante, también es relevante el hecho de que un porcentaje importante de los jueces encuestados hayan considerado que en realidad, no hay afectación a la presunción de inocencia. Fundamentan su criterio en el hecho de que el procesado tiene un defensor, y asume voluntariamente su participación en los hechos que están demostrados solamente para recibir un beneficio en la reducción de la pena, no se afecta su presunción de inocencia, que solamente se rompe con la resolución, porque aun habiéndose admitido seguir el proceso por el abreviado, ello puede terminar y retomarse el procedimiento ordinario.

Otros jueces consideran que, cuando el procesado admite su participación en los hechos imputados, está expresamente renunciando al principio de presunción de inocencia, lo que es absolutamente contraproducente con cualquier criterio racional y objetivo del debido proceso contemporáneo, porque la presunción de inocencia es un derecho fundamental, y por ende, el procesado no puede renunciar a él, sino que solamente se autoriza su afectación temporal por una resolución que disponga una condena. Por ende, este fundamento se considera inválido, ya que no debe afectarse un principio fundamental del debido proceso y pilar esencial del derecho de las personas a ser presumidas como inocente de cualquier acusación hasta tanto se demuestre en juicio justo y mediante una resolución condenatoria, lo opuesto.

Pregunta 4. ¿Considera usted que, es necesario realizar un análisis constitucional del procedimiento abreviado en el Ecuador?

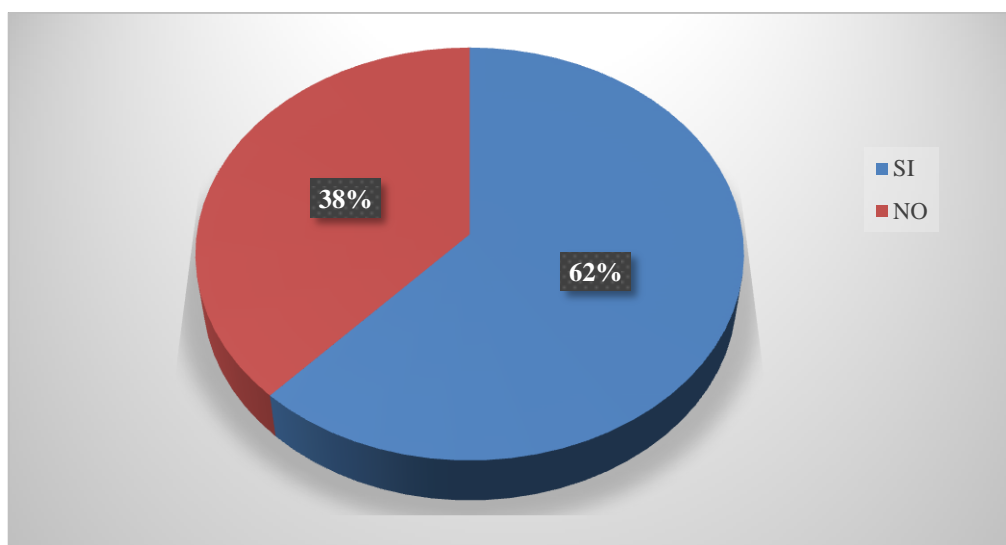
Tabla 8.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	13	62%
NO	8	38%
TOTAL	21	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 10.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: La pregunta que se analiza, tiene como objetivo, determinar de forma integral cuál es el criterio de los jueces encuestados en torno a si es pertinente realizar una valoración de constitucionalidad de las reglas del procedimiento abreviado en el COIP, ante lo cual el 62% de los jueces encuestados coinciden en que sí sería beneficioso, mientras que el 38%, opinó que no.

INTERPRETACIÓN: El resultado del análisis de esta pregunta adquiere especial relevancia. Es realmente importante el hecho de que, la mayoría de los jueces encuestados coincidan en que, sería favorable que se revisaran las reglas de este procedimiento, pues, de la forma en la que se encuentra establecido en la actualidad, puede propender a que se cometan arbitrariedades en el proceso de negociación de la pena. Pero también, para que en este tipo de procedimiento, se logre una verdadera imparcialidad, pues ciertamente cuando le llega a un juez un asunto o petición de este tipo, es claro que el juzgador asume como real la culpa del procesado.

Otros jueces consideran que en este procedimiento, aunque se logra mayor celeridad, se hace por sobre un conjunto de principios y derechos que son afectados, principalmente aquellos como la presunción de inocencia y el de no autoincriminación; pues el juez toma como ciertos los hechos que le son presentados por el juez y que fueron admitidos por el procesado, sin llevar a cabo ningún acto de comprobación y análisis real, de forma tal que se deja al criterio que le es presentado, lo que sin duda alguna afecta estos derechos.

También es importante el criterio de los jueces que consideran que no es necesario una revisión constitucional, porque este tipo de procedimientos tiene como finalidad lograr celeridad procesal y evitar el congestionamiento de los tribunales, lo que se ha logrado, además que ha demostrado que es beneficioso para el procesado, siendo reconocido de esta forma en muchas legislaciones. No obstante, se considera desacertado estos fundamentos, pues no se puede crear un proceso penal garantista afectando derechos y principios esenciales para lograr rapidez.

2.4.3 Encuesta realizada a procesados en la Unidad Judicial Penal Cuenca en Procedimiento Abreviado

Pregunta 1. ¿En qué año fue procesado y sancionado usted en la Unidad Judicial Penal Cuenca?

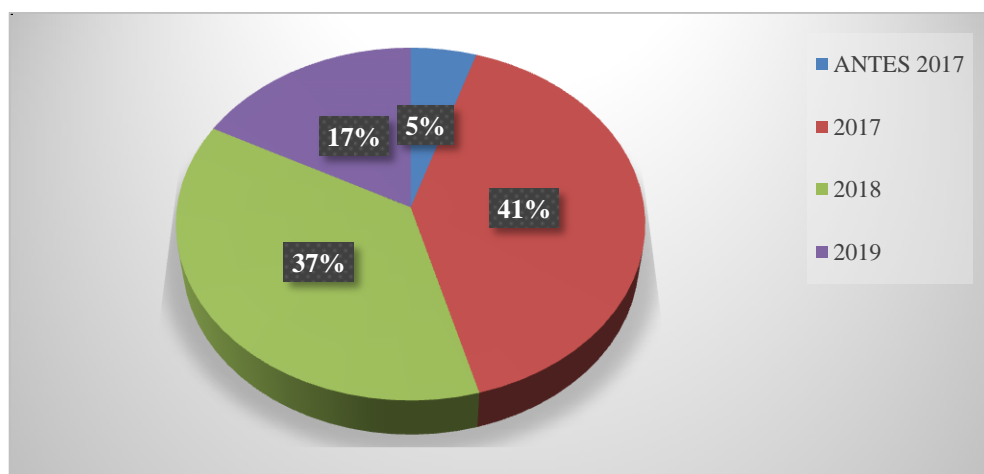
Tabla 9.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
ANTES 2017	15	5%
2017	123	41%
2018	112	37%
2019	52	17%
TOTAL	302	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 11.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

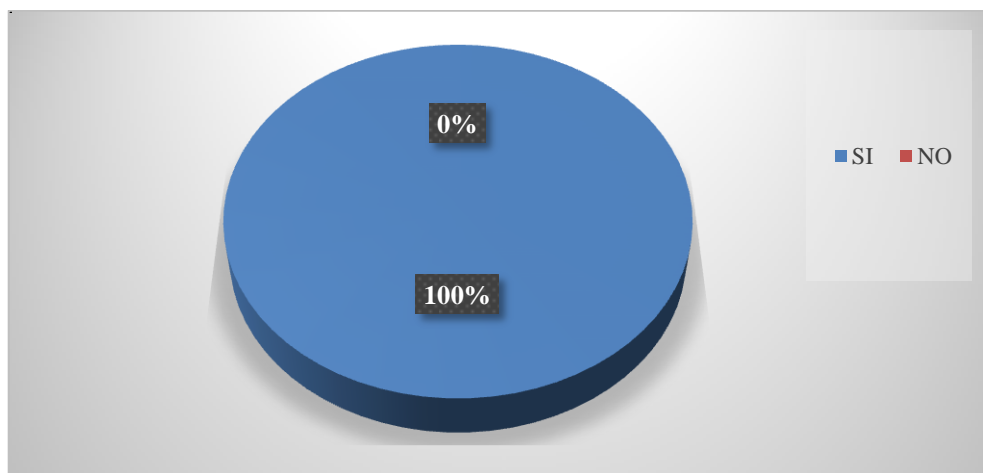
ANÁLISIS: La pregunta que se analiza tiene como finalidad conocer el periodo en el que el encuestado fue procesado, para tener un referente, de forma tal que el 41% de los encuestados fueron sancionados en el año 2017; 37% en el año 2018; 17% en el presente año; mientras que solo el 5% de los encuestados fueron procesados en años previos al 2017.



INTERPRETACIÓN: El resultado del análisis de la encuesta es importante, porque evidencia que la amplia mayoría de los procesados encuestados, fueron condenados recientemente. De esta forma es claro que todos se procesaron por este procedimiento con posterioridad a la entrada en vigor del COIP, lo que indica que todos fueron sometidos a este proceso según las reglas de dicha norma procesal.

Pregunta 2. ¿Usted se sometió a un Procedimiento Abreviado?**Tabla 10.**

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	302	100%
NO	0	0%
TOTAL	302	100 %

Fuente: Encuesta.**Realizado por:** Christian Manuel Valarezo Loayza.**Gráfico 12.****Fuente:** Encuesta.**Realizado por:** Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: Con el objetivo de conocer si en efecto, todos los procesados encuestados fueron a través del procedimiento abreviado, se planteó la pregunta que se analiza, ante lo cual el 100% respondió afirmativamente.

INTERPRETACIÓN: El análisis de la interrogante tiene gran importancia. Aunque en la práctica, el investigador tuvo el cuidado de que en efecto, los encuestados hubieren sido personas que hubieron de someterse al procedimiento abreviado, siempre existe un margen de error. Por ello, se diseñó la interrogante, para tener la seguridad y certeza de que, la muestra a la que se le aplicó el instrumento, conociera porque fue sujeto directo de la aplicación de este procedimiento, lo que se logró.



El hecho de que la totalidad de los encuestados han sido procesados y sancionados por medio de este tipo de procedimiento, adquiere especial relevancia en esta investigación, porque claramente las consideraciones y percepciones que derivan de la encuesta, la ofrecerán personas que han sido sometidas a este proceso, aportando de forma personal y directa sus consideraciones en torno a su discernimiento en torno a los beneficios y desventajas de haberse sometido a las reglas de dicho procedimiento.

Pregunta 3. ¿Tuvo usted que admitir los hechos fácticos que se le atribuían por parte del Fiscal?

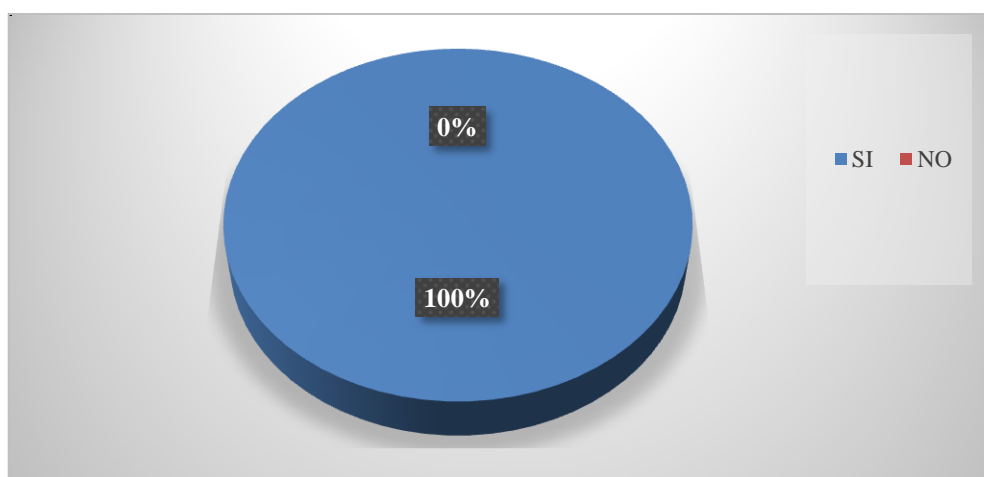
Tabla 11.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	302	100%
NO	0	0%
TOTAL	302	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 13.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: Con el objetivo de conocer si en efecto, todos los procesados encuestados fueron a través del procedimiento abreviado, se planteó la pregunta que se analiza, ante lo cual el 100% respondió afirmativamente.

INTERPRETACIÓN: Aunque pareciere innecesario, porque claramente en el procedimiento abreviado la admisión de los hechos es un requisito sustancial, se decidió incorporar este tipo de interrogante teniendo en cuenta que es necesario tener certeza de que entre los procesados existe conocimiento sobre este particular. De esta forma, el hecho de que la totalidad de los privados de la libertad que fueron encuestados hayan respondido afirmativamente, indica que todos y cada uno de

ellos conocen el alcance y la exigencia de su planteamiento cuando fueron procesados, conociendo por ende las ventajas y desventajas de su dicho y cómo, ello supuso una declaración de responsabilidad.

Pregunta 4. ¿Realizó usted todos y cada uno de los hechos que el Fiscal le atribuyó y que usted admitió para someterse al Procedimiento Abreviado?

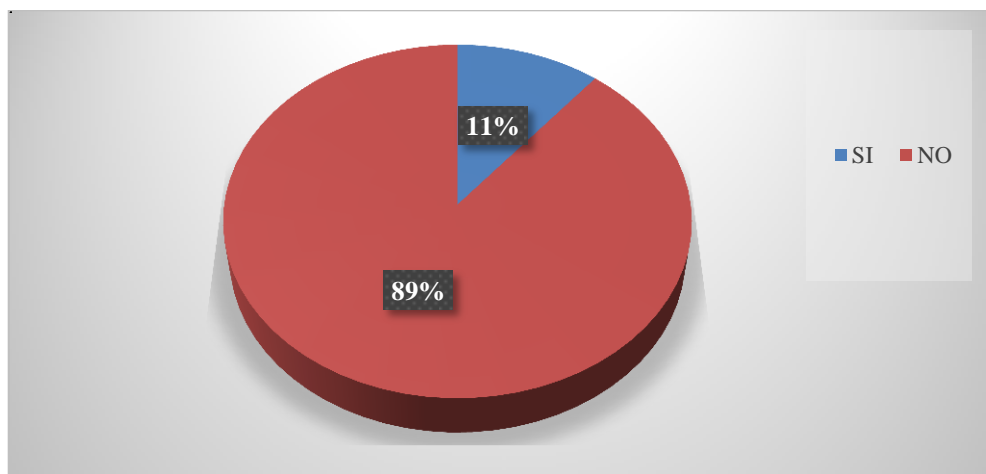
Tabla 12.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	33	11%
NO	269	89%
TOTAL	302	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 14.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: Es necesario conocer si, los hechos y circunstancias que los procesados admitieron, todas eran verídicas; ante lo cual el 89% de los sancionados encuestados refirieron que no; mientras que el 11% respondió lo contrario.

INTERPRETACIÓN: El resultado del análisis de esta interrogante es realmente preocupante, porque uno de los riesgos que tiene el sometimiento al procedimiento



abreviado con sus beneficios, se cumple. En este sentido, se le confiere absoluta certeza a lo que han expuesto los procesados, pues se trata de personas que ya han sido sancionadas y que, mintiendo en este aspecto, no lograrían ningún beneficio, por ende, es claro que han dicho la verdad. De esta forma, queda demostrado que, en la amplia mayoría de los casos, los procesados para obtener los beneficios de este procedimiento y poder negociar la pena con el Fiscal, aceptan todos los cargos y circunstancias tanto agravantes como atenuantes, para no someterse a un proceso ordinario.

Pregunta 5. ¿Considera usted que, el hecho de que el procesado tenga que admitir los hechos fácticos que se le atribuyen por el Fiscal, es correcto?

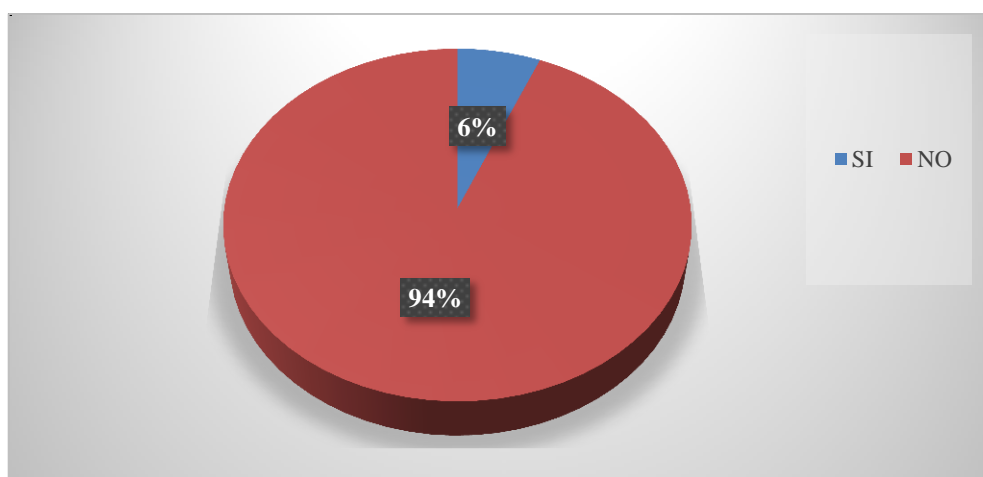
Tabla 13.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	19	6%
NO	283	94%
TOTAL	302	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 15.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: La finalidad de esta pregunta es conocer la consideración que poseen los procesados por este procedimiento en torno a tener que admitir los hechos imputados por el Fiscal, ante lo cual el 94% opinó que no era correcto; mientras que solo el 6%, expuso que sí.

INTERPRETACIÓN: Del análisis de la interrogante es claro que existe una percepción entre todos los procesados que el tener que aceptar los hechos tal y como se los presenta el Fiscal, es incorrecto. Ello es claro, porque indica que, con tal de acceder a los beneficios que derivan de la aplicación de procedimiento abreviado, e incluso, la terminación rápida del proceso, prefieren reconocer todos los hechos y

circunstancias, aunque no todos hayan sido verídicos, con tal de acceder al beneficio de la reducción de la pena. Ello realmente es grave, porque se rompe no solo con la presunción de inocencia sino con la obligación del Fiscal de demostrar los hechos ante un juez y acreditar la responsabilidad del sujeto, lo que no sucede, por lo que este facilismo que impera, afecta sustancialmente la legitimidad misma del proceso.

Pregunta 6. ¿Considera usted que, cuando se le aplicó el Procedimiento Abreviado, se le consideraba inocente?

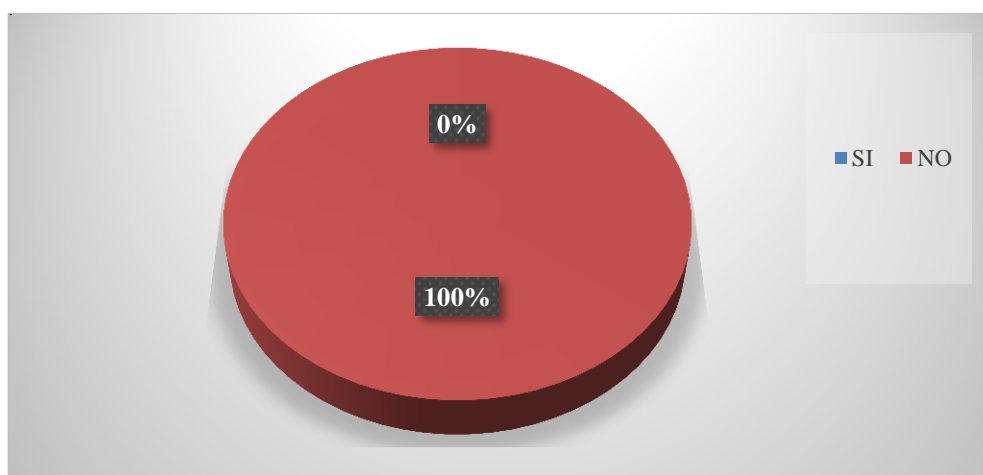
Tabla 14.

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	0	0%
NO	302	100%
TOTAL	302	100 %

Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

Gráfico 16.



Fuente: Encuesta.

Realizado por: Christian Manuel Valarezo Loayza.

ANÁLISIS: Es necesario igualmente conocer si desde la percepción de los condenados por medio del Procedimiento Abreviado, fueron tratados como inocentes; a lo que el 100% de los encuestados opinaron que no.

INTERPRETACIÓN: Es realmente interesante, el hecho de que la totalidad de los procesados por medio de este procedimiento, tengan la consideración de que, nunca fueron considerados y por ende, tratados, como inocentes. Esto es realmente grave, porque además de erigirse como un fundamento sustancial del debido proceso contemporáneo, pilar sustancial del acusatorio, es legitimador de la función punitiva del Estado, por ende, si los sujetos destinatarios del accionar sancionatorio de la función jurisdiccional, no reconocer correcto el actuar o no se sienten como verdaderos inocentes hasta tanto se dicte una resolución en un proceso con todas las garantías, es claro que estaría fallando la finalidad del derecho penal, y por ende, no se lograría de mayor forma, los fines de la pena.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS CRÍTICO EN TORNO A LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL ECUADOR.

3.1 Análisis crítico de la vulneración del principio de presunción de inocencia en el procedimiento abreviado en el Ecuador

A partir de los análisis de casos e instrumentos que han sido analizados e interpretados en la investigación, es claro que en el procedimiento abreviado, se atenta contra un principio fundamental del debido proceso contemporáneo, que es la presunción de inocencia. Con la promulgación del COIP en el año 2014, se inicia un proceso penal novedoso, caracterizado supuestamente por mayores garantías dentro del proceso penal, regidos por un nuevo constitucionalismo derivado de la Carta Magna del año 2008. También se incorporan nuevos procedimientos respondiendo a una exigencia de dotar a los procesos penales contemporáneos de mayor celeridad.

No obstante, en la realidad ecuatoriana, aunque el procedimiento abreviado fue recibido como una muestra procesal penal que contribuía, junto a otros, a descongestionar los juzgados ante hechos delictivos que no merecían ser tratados por el ordinario, en la realidad supuso ciertamente, una reducción de los tiempos en los que se determina la condición jurídica del procesado, pero afectando sustancialmente la presunción de inocencia y es que, el hecho de que el procesado tenga que admitir los hechos que le son imputados por el Fiscal, para poder acceder a los beneficios que derivan de este procedimiento y por ende, poder negociar la sanción, supone una desnaturalización *a priori* de la presunción de inocencia.

Realmente es preocupante el criterio que muchos jueces poseen en torno a la legitimación de todas y cada una de las reglas que imperan en este tipo de procedimiento; pues si bien es cierto sus ventajas en torno la celeridad y descongestionamiento de los juzgados, ello no puede ni es de hecho, motivo suficiente como para afectar un principio fundamental del debido proceso. De esta forma, no puede amputarse un pilar esencial del sistema acusatorio, uno de los grandes logros evolutivos de los sistemas de enjuiciamiento contemporáneo, para

lograr terminar las causas que se someten al arbitrio de la justicia en menor cantidad de tiempo.

En el COIP, es claro el hecho de que, el presunto comisor de un hecho delictivo, si quiere ser procesado con las reglas del abreviado, tendrá que aceptar los hechos y circunstancias tal y como el Fiscal se las imputa. Esta normativa nada refiere en torno a la posibilidad de que el procesado y su defensor, y el Fiscal, puedan negociar esos hechos. Solo se limita a tener que aceptarlos, de forma tal que, un individuo en esta situación, para acceder a un beneficio de reducción o negociación de la sanción a imponerse, aceptaría dichas circunstancias.

El problema no se encuentra en si el procesado, lo hace de forma libre y voluntaria, o si al hacerlo con el defensor de testigo de que no ha sido forzado para ello, incluso la dificultad no radica en el hecho de que el juez, realice un análisis de legalidad del proceso en sí; el verdadero dilema acá es que, con la aceptación de los hechos por parte del sujeto, se quebranta desde ya el principio de presunción de inocencia, porque al hacerlo, está admitiendo su participación en los hechos, la veracidad de que ocurrieron de la forma y en la calidad que los narra el Fiscal; por lo que desde ese momento, ya está declarándose su culpabilidad.

Penoso es también que algunos jueces han referido que, como el individuo posee libertad de hacerlo, cuando admiten los hechos, están renunciando a la inocencia, lo que realmente es grave si viene de un administrador de justicia. La doctrina, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales han dejado en claro que, la presunción de inocencia es un principio que posee toda persona que es sometida a un proceso penal, y que únicamente se destruye con la declaración de culpa que ejecuta el juez en su resolución. Por ende, solamente es el juez, ni siquiera el mismo procesado, el que tiene competencia real para afectar este derecho.

Sin embargo, en el procedimiento abreviado, tal y como se regula en el COIP, destruye la inocencia mucho antes de que el juez dicte su resolución. De la lectura del propio art. 637 de esta norma penal, deja en claro que una vez instalada la audiencia, se procederá finalmente a dictarse una resolución en contra del procesado, ello es, está reconociendo desde el inicio del proceso, el efecto sancionatorio del procedimiento. Ello supone que, en la práctica, la admisión de los

hechos por parte del procesado, supone desde el momento en que se hace, frente al fiscal, un reconocimiento de culpa lo que es suficiente para tener finalmente una condena. Ello supone una destrucción de la presunción de inocencia desde mucho antes a que el juez dicte la resolución.

Este análisis que se ha desarrollado, claramente es debido a las encuestas que se le han realizado a los abogados y los procesados, incluso a algunos jueces, quienes comparten la opinión de que, en efecto, las reglas que caracterizan este procedimiento afectan la presunción de inocencia como también otros principios como el de no autoincriminación. Ello es de gran importancia, porque en efecto, existe una postura mayoritaria que evidencia una percepción de que se vulnera de alguna manera este principio, lo que justifica la necesaria revisión constitucional de este procedimiento.

Unido a ello, la revisión y análisis de los diversos procesos que se estudiaron, la amplia mayoría de ellos no abundan sobre el análisis que debe imperar sobre cada uno de los requisitos para proceder a aplicar el procedimiento abreviado. Como se estableció en su momento, de las resoluciones que se analizaron, se puede evidenciar que los jueces para aceptar seguir el procedimiento por las reglas de referencia, hacen un análisis mecánico, con poca o ninguna profundidad; limitándose a señalar que el procesado admitió los hechos y analizando nada de los elementos de prueba.

Ello quiere decir que los jueces, principalmente en primera instancia, en las solicitudes de procedimiento abreviado, no realizan un análisis suficiente de si en efecto, se cumplen y cómo lo hacen, cada uno de los requerimientos legales para poder aceptarlo. No se trata única y exclusivamente de mencionarlos en las resoluciones, sino de motivar la procedibilidad de adoptarlo. También es imprescindible que, aun cuando el procesado admite su participación en los hechos, el juzgador realice un análisis de los elementos probatorios en los que se sustenta que los hechos acontecieron en la forma en la que el Fiscal los narra y que en efecto, existen evidencias suficientes como para vincular al procesado a dichos hechos. Ello sin duda alguna legitimaría la decisión.

De esta forma, es claro que, el juez también da por hecho la culpa del procesado cuando se le presenta el acuerdo entre este y el fiscal, asimilando desde

ese primer momento, la responsabilidad del individuo antes de dictar la resolución, por lo que el juez es sujeto principal en la afectación del principio de presunción de inocencia, pues como se ha evidenciado de las resoluciones analizadas, no hacen mayores observaciones ni motivaciones sobre cada uno de los pasos que se dan en los mismos.

Es así que claramente, en la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado en el Ecuador, especialmente con el hecho de que, el procesado debe admitir su participación en el hecho factico que le imputa el fiscal, se evidencia una clara y grave afectación de la presunción de la inocencia. La idea sobre estas críticas que se le hacen no se sustenta en una intención de eliminar este tipo de procedimientos, pues es claro que son necesarios como un mecanismo efectivo para dotar a la administración de justicia de mayor rapidez. Lo cierto es que ello no puede fundamentarse en la restricción o afectación de ninguno de los derechos fundamentales del procesado, mucho menos en uno que es tal sustancial como la presunción de inocencia, pilar del sistema acusatorio contemporáneo.

3.2 Planteamiento de ideas sobre una propuesta de solución

A partir de los aspectos que han sido demostrados con el estudio que se ha realizado, claramente en la realidad procesal penal ecuatoriana, el procedimiento especial abreviado atenta contra derechos y principios que constituyen pilares del debido proceso. De esta forma, es necesario establecer algunas ideas que fundamentan la necesidad de una declaratoria de inconstitucionalidad para que se detenga la flagrante vulneración de estos derechos cada vez que se tramite un procedimiento abreviado en el Ecuador.

3.2.1 Antecedentes de la propuesta

La Constitución del año 2008 supuso una reestructuración del Estado ecuatoriano. Su aprobación permitió transitar en el país de un Estado social de derecho hacia un Estado constitucional de derechos. Ello, a los efectos democráticos, implica un reconocimiento al nuevo constitucionalismo, pues se reafirma el carácter supremo de los derechos, normas y principios contenidos en el texto fundamental. Como bien afirmaba el investigador ecuatoriano Mancero (2011), ello supuso garantizar de forma absoluta los derechos constitucionales de todos los

ecuatorianos, dotándole a todos y cada uno de ellos “(...) igual jerarquía, interdependientes, justiciables y de aplicación directa e inmediata” (p. 111).

Ello, quiere decir que, el conjunto de categorías e instituciones presentes en dicho documento, son irrenunciables, pues el carácter fundamental que poseen, asegura que los ciudadanos puedan disfrutar sin ningún tipo de obstáculo y restricción, cada uno de los derechos reconocidos, en la forma, sentido y alcance que el constituyente los reguló. Disminuirlos en su disfrute, supone no solo atentar contra el derecho en sí, sino contra la propia naturaleza del Estado constitucional de derechos y justicia reconocido en el artículo 1 de la Carta Magna ecuatoriana.

En ese mismo sentido, claramente el artículo 3 numeral 1 del propio texto constitucional, establece que el Estado ecuatoriano tiene el deber de garantizar el pleno y efectivo goce de todos los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales, sin ningún tipo de discriminación, lo que refuerza la obligación estatal de, por medio de sus acciones ejecutivas, legislativa y judiciales, tengan que respetar integrante los preceptos y normas derivadas de dicho texto.

De igual relevancia es la regulación del principio de igualdad reconocido en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución, en la que claramente el constituyente establece que todos podrán disfrutar de los derechos y oportunidades, y nadie podrá ser discriminado por razón alguna. Cuando se establece en dicho precepto que, ninguna persona podrá discriminarse teniendo en cuenta ciertos elementos y “ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos”; está claro que, no existe ninguna razón, para que se limite los derechos, a una persona que está en goce de los mismos; se presume inocente; hasta que se dicte una sentencia condenatoria.

En el propio artículo 11, numeral 3, se reconoce el carácter directo e inmediato en la aplicación de los derechos de las personas, lo que supone lo innecesario de promulgar normas que permitan aplicar o reconocer un derecho; pero también implica que, cuando una norma no se encuentre en armonía con lo dispuesto en la Carta Magna, igualmente será inválido, por el carácter superior de estas, concordante con lo estipulado en el artículo 424 del propio texto fundamental.

En el numeral 4, se establece el hecho de que, ninguna norma jurídica inferior a lo establecido en la Constitución podrá restringir el contenido de ninguno de los derechos reconocidos en dicho texto, ni las garantías establecidas. Unido a ello, como ya se ha analizado a lo largo de la investigación, la propia carta magna, establece en su artículo 76 las garantías básicas que deben ser observadas en el debido proceso, dentro de la que se encuentra la presunción de inocencia; a la defensa en lo concerniente a contar con el tiempo y medios adecuados, a poder presentar sus razones y replicar las del fiscal, presentar pruebas y contrariar las que son presentadas por el fiscal, la carencia de motivación.

Este conjunto de elementos que han sido analizados, constituye sin duda alguna los fundamentos en los que se sustenta la propuesta que es presentada. Cada una de las normas y derechos que han sido mencionados, se erigen como la base sustancial sobre la que se fundamenta el conjunto de ideas que delimitarán en esencia, la reestructuración de aquellos preceptos en el procedimiento abreviado que atentan contra cada uno de los contenidos de los principios referidos. Ellos, constituyen, los antecedentes que sustentan esta propuesta.

3.2.2 Justificación

A partir del estudio que ha sido realizado, es claro que en la tramitación del procedimiento abreviado en el Ecuador, siguiendo las reglas que están contenidas en el COIP, se vulneran un conjunto de derechos y principios que realmente ameritan prestar mayor atención a esta problemática. Lo cierto es que ha podido demostrar que, determinados presupuestos para que el procesado pueda acceder a los beneficios de este procedimiento especial, que afectan entre otros principios, la presunción de inocencia, pilar fundamental sobre el que se sustenta el debido proceso.

A partir de esta realidad, es que se plantea una propuesta que busca dos cosas en principio. La primera es, no afectar sustancialmente la existencia de procedimientos especiales en el COIP. Existe un consenso innegable sobre la relevancia de la utilización de procesos más ágiles y sencillos para dotar a la administración de justicia de mayor eficacia. En este sentido, la propuesta que se plantea si bien tiene como objetivo sustancial eliminar aquellos elementos que

atentan contra la presunción de inocencia y otros derechos, no busca restarle relevancia ni eficacia al procedimiento abreviado.

La segunda es que, manteniendo la celeridad del abreviado, se logre su objetivo sin menoscabar ni restringir sustancialmente derechos y garantías del debido proceso como la presunción de inocencia y la defensa. Las ideas de propuesta que se plantean se fundamentan en la necesidad de lograr procesos ágiles en el país pero sin limitar los derechos del proceso, ello es, asegurar siempre en la mayor medida posible el conjunto de derechos y garantías que se encuentran reconocidos en la Constitución del año 2008.

Estos elementos que han sido mencionados poseen gran relevancia jurídica. Ciertamente la propuesta que se estructura se fundamenta en la necesidad de garantizar los derechos del procesado, de forma tal que, para acceder a ciertos beneficios no sea necesario atentar contra derechos sustanciales del enjuiciamiento penal. Por ende, lograr tal planteamiento por medio de la propuesta, aseguraría innegablemente una armonía con los presupuestos no solo de la Carta Magna ecuatoriana del año 2008, sino también, con los principales mandatos de los instrumentos internacionales.

Adicional a ello, es claro que la propuesta que se plantea también tiene relevancia académica. Como se ha establecido y la doctrina es suficiente en torno a ello, los procedimientos especiales si bien poseen innegables beneficios también han sido objeto de constantes críticas por la academia, pues reducir tiempos y cumplir con ciertos requerimientos implica, generalmente, afectar derechos y garantías sustanciales del debido proceso. Teniendo ello como fundamento, la propuesta intenta reducir la tensión existente entre lo regulado en el COIP y las críticas que genera la afectación de derechos en el procedimiento abreviado. Por medio de las ideas que se plantean en la propuesta se busca que, la doctrina reformule sus postulados en torno a esta cuestión, garantizando que, si bien puedan continuar las críticas doctrinales, posean una fuerza menor, teniendo en consideración que, se asegurarían mucho más, dichos principios.

De esta forma, es claro que, la propuesta que se plantea asegura al procesado, una mayor protección y seguridad de su estado de inocencia para acceder a los beneficios derivados del procedimiento abreviado. Es incuestionable

que, las reglas de este proceso especial afectan no solo la garantía de ciertos derechos del debido proceso, sino también, afectan, al procesado. Las ideas que conforman la propuesta, proveen el entorno para que el procesado, teniendo en cuenta determinados requerimientos como el delito, pueda acceder a los beneficios sin que para ello tenga que declarar su culpabilidad ni admitir los hechos que se le imputan.

Todos estos aspectos que han sido abordados, constituyen básicamente la justificación de la propuesta. Es menester tener claridad en el hecho de que, las ideas que estructuran la solución a los problemas que han sido comprobados en el estudio, se sustentan en cuestiones legales y prácticas, que garantizan un proceso penal mucho más garantista y concordante con los presupuestos constitucionales del país.

3.2.3 Beneficiarios

En la propuesta que se pretende aportar, básicamente hay dos categorías que pueden considerarse como los beneficiados de la misma. Es indiscutible que una idea en torno a la modificación de un proceso penal, en aras de dotarlo de mayor eficacia y garantías para las partes, principalmente para el procesado, provee el espacio para que el sistema de justicia sea mucho mejor. Y en efecto, el primer beneficiario de las modificaciones que se proponen, es la administración de justicia penal del Ecuador. Como se ha defendido a lo largo de la investigación, los procedimientos especiales generan pocas críticas y es que en ello, se vulneran o restringen determinados derechos y garantías, por lo que, plantear ciertas ideas que aseguren de mejor forma esos derechos y esas garantías, favorece y legitima el sistema procesal penal nacional.

Es en base a ello que, la impartición de justicia penal, el proceso penal, las garantías y derechos constitucionales en el entorno penal, estarían más aseguradas porque favorecen que la restricción o limitación de derechos disminuya sustancialmente y aun así, se logren los objetivos de este tipo de procedimiento, que es lograr celeridad y descongestionar la función de los juzgados. Ante ello, el procedimiento abreviado, lograría mayor legitimidad y menor cantidad de críticas, al lograr impartir justicia con prontitud, sin tener que respetar de forma absoluta las

reglas del ordinario, pero igualmente asegurando en mayor medida, los derechos y garantías del debido proceso reconocidas en la Constitución.

El segundo beneficiario sería, de forma indiscutible, el procesado. Es claro que el presunto comisor del hecho delictivo, es el principal afectado con las normas y reglas del procedimiento abreviado y, aunque pudiera pensarse que es todo lo contrario, porque accederá a los beneficios de este proceso, lo cierto es que no, pues obtiene ciertas ventajas por sobre el desmérito de otros derechos, lo que no es justificable bajo ninguna circunstancia.

A partir de la propuesta, el procesado podrá acceder a los mismos beneficios, obtendrá una resolución a su proceso de forma rápida, pero cumpliéndose de mejor forma, las garantías del debido proceso que le reconoce la Constitución. Es así que la propuesta le asegura al procesado que los derechos que posee no serán disminuidos sustancialmente ni reducidos de forma cuasi absoluta para poder acceder a las ventajas del procedimiento en sí, y mucho menos, tener que admitir los hechos y circunstancias que le son imputadas por el fiscal para poder ser procesado por este medio.

3.2.4 Objetivos

Objetivo General:

- Atenuar la vulneración de derechos y garantías del debido proceso en el procedimiento abreviado en Ecuador.

Objetivos Específicos:

- Garantizar de mejor forma los derechos y garantías constitucionales del debido proceso en el procedimiento abreviado en el COIP.
- Reestructurar determinadas reglas legales establecidas en el COIP sobre el procedimiento abreviado.
- Fortalecer el reconocimiento y seguridad de los derechos del procesado y su presunción de inocencia en el procedimiento abreviado en el COIP.

La propuesta que se deriva de la investigación que se ha realizado, debe enfocarse en la declaración de inconstitucionalidad de varios preceptos legales

pertenecientes el procedimiento abreviado reconocido en el Código Orgánico Integral Penal. Para ello, debe consolidarse el conjunto de preceptos constitucionales que son vulnerados con las normas que han sido señaladas y que en resumen, son las siguientes:

- El numeral 2 del artículo 635 del COIP, cuando refiere que solo el fiscal será quien puede realizar la propuesta de continuar el proceso por las reglas del abreviado, vulnera el principio de igualdad de armas dentro del proceso, por ende, deberá ser tratada como tal según lo establecido en el art. 76 numeral 2 de la Constitución del Ecuador, al presumirse su inocencia y conferírsele las mismas potestades que al acusador, en torno a esta posibilidad.
- El numeral 3 del artículo 635 del COIP, cuando regula que la persona procesada deberá admitir los hechos que se le atribuyen para acceder al abreviado, atenta directamente contra el principio de presunción de inocencia reconocido en la Carta Magna ecuatoriana reconocido en el art. 76 numeral 2, porque supone una violación a dicha condición.
- El numeral 3 del artículo 635 del COIP, cuando regula la cuestión referida con anterioridad, vulnera, además, el principio de no autoincriminación, según lo establecido en el art. 77 numeral 7 inciso c, que establece como parte del derecho a la defensa de la persona que se somete a un proceso penal y se encuentra privada de la libertad, a declarar sobre asuntos que impliquen un reconocimiento de su responsabilidad penal.
- El inciso 3 del artículo 636, cuando refiere que la pena sugerida será el resultado del análisis de los imputados y aceptados, igualmente atenta contra el principio de inocencia regulado en la norma constitucional precitada; por ende, es necesario eliminar el término “aceptados”, porque atenta contra el referido principio que debe imperar en todo momento y hasta que el juez dicte la resolución.
- El inciso del art. 637 al final, cuando refiere que, se aceptarse la solicitud de procedimiento abreviado, el juzgador instalará la audiencia y dicta la resolución, constituye un adelanto de la culpabilidad de procesado, atentando contra el principio de presunción de inocencia, por lo que va en contra del referido derecho y por ende, es inconstitucional. De esta forma, es necesario que en dicha audiencia, siguiendo las reglas y normas aplicables a la misma,

se practiquen pruebas que ratifiquen la inocencia o demuestren la culpabilidad.

- En el propio artículo 637 inciso 3, al final, cuando se refiere que en la audiencia, se le dará la palabra a la persona procesada para que exprese nada más que su aceptación del procedimiento, se está dando por hecho que es culpable y que nada más tiene que aportar al proceso, violentándose de esta manera su derecho a defenderse y presunción de inocencia, atentando contra lo establecido en el art. 76 numeral 2 y 7 incisos a, b, c, h y k de la Constitución ecuatoriana.

CONCLUSIONES

De la investigación que ha sido presentada, es menester arribar a determinadas conclusiones:

- El debido proceso en la actualidad, está sustentado sobre la garantía de un conjunto de derechos que le asisten a las partes, que aseguran en su conjunto el cumplimiento y respeto de las reglas que, constitucionalmente se regulen, lo que ofrece a los partícipes del proceso, seguridad jurídica.
- En la actualidad, con la democratización de los procesos penales, y el tránsito de los Estados sociales de derechos a constitucionales, los derechos y garantías del debido proceso han sido regulados en las constituciones, con la finalidad de dotar de mayor seguridad al cumplimiento de las disposiciones que deben ser observadas en el enjuiciamiento criminal.
- Ecuador no ha estado al margen de ello. Con la promulgación de la Carta Magna de 2008, se transita hacia un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, por lo que el conjunto de principios, reglas, derechos y garantías constitucionales adquieren especial relevancia, de forma tal que, en toda acción o decisión que sea adoptada respecto a un procesado, deben cumplirse sin ningún tipo de restricción o limitación.
- Como consecuencia del nuevo constitucionalismo ecuatoriano, se promulgan leyes como el Código Orgánico Integral Penal, que reguló procedimientos especiales como el abreviado. Con la finalidad de dotar a la administración de justicia de mayor celeridad y eficacia, procedimientos como el mencionado, se establecieron en la realidad nacional.
- Si bien con la regulación del procedimiento abreviado se logró el descongestionamiento de los juzgados y la prontitud en las resoluciones de los casos, ello se obtuvo violentando determinados derechos y garantías constitucionales, disminuyendo o restringiendo el efectivo goce de prerrogativas como la presunción de inocencia.
- Se ha podido comprobar que en la realidad ecuatoriana, en el procedimiento abreviado, tal y como se encuentra establecido en la ley penal, violenta el

principio de presunción de inocencia pues, de la lectura de su articulado, se puede constatar claramente que, el tratamiento que se le da al procesado ante su admisión d ellos hechos que se le imputan supone, de por sí, una afectación sustancial a su inocencia.

- La amplia mayoría de los profesionales del derecho que fueron consultados, coinciden que en efecto, se atenta contra el referido principio, siendo necesario reestructurar las reglas que rigen en el abreviado de forma tal que, asegurando igualmente la celeridad y eficacia procesal, garantice igualmente de mejor forma, los derechos del procesado especialmente su presunción de inocencia.

RECOMENDACIONES

A partir del estudio que ha culminado y de las conclusiones a las que se ha podido arribar, se pueden formular las siguientes recomendaciones:

- Presentar la investigación al Comité Académico de la Universidad de Cuenca, para su legitimación y autorización como investigación académica seria y de rigurosidad científica demostrada.
- Socializar los planteamientos y propuesta de la investigación con estudiantes y docentes de la Universidad de Cuenca, a los efectos de enriquecer de mejor forma, los contenidos e ideas planteadas.
- Publicación de la investigación, sus principales postulados, resultados y propuestas, no solo en el repositorio de la Universidad de Cuenca, sino en otras plataformas, de forma tal que provean su generalización y constante enriquecimiento.
- Iniciar la reunión de criterios de autores y juristas con vistas a presentar en su momento, la acción de inconstitucionalidad de las partes que han sido señaladas concernientes al procedimiento abreviado regulado en el COIP.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, P. A. (2010). Los principios generales del derecho y las normas tipo principio: su conceptualización y uso el ordenamiento internacional. *Revista Derecho del Estado*(25), 193-219.
- Anda, A. I. (2016). El respeto al principio de inocencia y los medios de comunicación. En P. L. González, J. A. Witker, & C. Natarén, *Las víctimas en el sistema penal acusatorio* (págs. 1-24). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Armenta, T. (2012). *Sistemas procesales penales. La justicia penal en Europa y América ¿Un camino de ida y vuelta?* Madrid: Marcial Pons.
- Armenta, T. (2017). *Lecciones de Derecho Procesal Penal* (10a ed.). Madrid: Marcial Pons.
- Arriagada, M. B. (2016). Conceptos jurídicos de derecho subjetivo. *Eunomía: Revista de Cultura de la Legalidad*(11), 152-162.
- Avila, R. (2013). *La (In)justicia penal en la democracia constitucional de derechos. Una mirada desde el garantismo penal*. Quito: Colección Profesional Ecuatoriana.
- Barata, F. (2009). La devaluación de la presunción de inocencia en el periodismo. *Anàlisi: Quaderns de Comunicació i cultura*(39), 217-236.
- Beccaria, C. (2015). *Tratado de los Delitos y las Penas (nueva traducción)* (2 ed.). Madrid: Universidad Carlos III.
- Bustos, J. E. (2015). Los derechos humanos y la doctrina del derecho subjetivo. *Anuario Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá*(8), 1-36.
- Cafferata Nores, J. (1997). *El principio de Oportunidad en el Derecho Argentino. Teoría, Realidad y Perspectiva*. Buenos Aires: Editores del Puerto S.A.
- Clariá Olmedo, J. A. (2008). *Derecho Procesal Penal Tomo III (actualizado por Jorge Raúl Montero)*. Buenos Aires: Rubinzal - Culzonbi Editores.

- Cornejo, J. S. (14 de 03 de 2016). *El Procedimiento Abreviado en el COIP*. Obtenido de Derecho Ecuador: <https://www.derechoecuador.com/el-procedimiento-abreviado-en-el-coip>.
- Cortázar, M. G. (2012). Las garantías judiciales. Anàlisis a partir de los estándares de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Prolegómenos*, XV(30), 65-79.
- Corte IDH, Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Serie C No. 319 (Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas 21 de 10 de 2016).
- Cuenca, Tribunal de Garantías Penales, Proceso No. 01283-2017-00135 (Sentencia (Robo) 15 de 06 de 2017).
- Cuenca, Tribunal de Garantías Penales, Proceso No. 01283-2016-04379 (Sentencia (Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización) 17 de 07 de 2017).
- Cuenca, Unidad Judicial Penal, Proceso No. 01283-2017-01032 (Sentencia (Incumplimiento decisiones legítimas de autoridad competente) 06 de 06 de 2017).
- Cuenca, Unidad Judicial Penal, Proceso No. 01283-2017-00837 (Sentencia (Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización) 06 de 06 de 2017).
- Dworkin, R. (2002). *Los derechos en serio*. (M. Guastavino, Trad.) Madrid: Ariel.
- Ecuador, Asamblea Constituyente. (20 de 10 de 2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Obtenido de Registro Oficial No. 499: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf.
- Ecuador, Asamblea Nacional. (10 de 2 de 2014). *Código Orgánico Integral Penal*. Obtenido de Aprobado mediante Ley No. 0. Publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 180: <http://www.asambleanacional.gob.ec/documentos/asamblea2013-2017/sala-prensa/coip-registro-oficial-180.pdf>.
- Ecuador, Congreso Nacional. (03 de 11 de 1871). *Código de Enjuiciamientos en Materia Criminal*. Obtenido de The New York Public Library. Imprenta de

Hallet y Breen:
<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433006216794;view=1up;seq=7>.

Ecuador, Congreso Nacional. (1892). *Código de Enjuiciamiento Criminal*. Quito: Imprenta del Gobierno.

Ecuador, Congreso Nacional. (1906). *Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal*. Quito: Imprenta Nacional.

Ecuador, Congreso Nacional. (1938). *Código de Procedimiento Penal*. Quito: Imprenta del Ministerio de Educación.

Ecuador, Congreso Nacional. (10 de 06 de 1983). *Código de Procedimiento Penal*.
Obtenido de Aprobado mediante la Ley No. 134. Publicado en el Registro
Oficial No. 511:
<http://181.211.115.37/biblioteca/juri/LEGISLACION/CODIGO%20DE%20PROCEDIMIENTO%20PENAL.pdf>.

Ecuador, Congreso Nacional. (13 de 01 de 2000). *Código de Procedimiento Penal*.
Obtenido de Aprobado mediante la Ley No. 0. Publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 360: <http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/C%C3%B3digo-de-Procedimiento-Penal.pdf>.

Ecuador, Consejo de la Judicatura. (2017). *Número de causas ingresadas y resueltas 2017 por Procedimiento Abreviado*. Quito: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística.

Ecuador, Corte Constitucional, Caso No. 0774-12-EP (Sentencia No. 289-15-SEP-CC 02 de 09 de 2015, p. 10).

Ecuador, Corte Constitucional, Caso No. 0983-12-EP (Sentencia No. 111-17-SEP-CC 19 de 04 de 2017, pp. 7-8).

Ecuador, Corte Nacional de Justicia (Resolución No. 09-2018 05 de 09 de 2018, p. 7).

Ecuador, DPE. (07 de 11 de 2018). *La Defensoría Pública plantea el debate sobre el uso excesivo de prisión preventiva*. Obtenido de Defensoría Pública del Ecuador; Friedrich-Ebert-Stiftung – ILDIS y el Instituto de Altos Estudios

Nacionales (IAEN), : <http://www.defensoria.gob.ec/?project=la-defensoria-publica-plantea-el-debate-sobre-el-uso-excesivo-de-prision-preventiva>.

Ecuador, Senado-Cámara de Representantes. (08 de 01 de 1848). *Ley de Jurados*. Obtenido de Harvard Law School Library. Leyes del Ecuador (copiadas de la las colecciones y gacetas oficales). Impresión de F. Bermeom por Manuel Vieira: <https://books.google.com.ec/books?id=MbQVAAAAYAAJ&pg=PP6&lpg=PP6&dq=Ley+de+Jurados+1848+ecuador&source=bl&ots=lrYVdL7xgZ&sig=M3sHiGtc-BBL9rJXZcT2Ha3FG6Q&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwilk7OP9rPTAhXDNIYKHc4RAucQ6AEIJzAB#v=onepage&q&f=false>.

Ecuador, Senado-Cámara de Representantes. (15 de 12 de 1853). *Ley de Procedimiento Criminal*. Obtenido de Harvard Law School Library. Leyes del Ecuador (copiadas de la las colecciones y gacetas oficales). Impresión de F. Bermeom por Manuel Vieira: <https://books.google.com.ec/books?id=MbQVAAAAYAAJ&pg=PR54&lpg=PR54&dq=Ley+de+Procedimiento+Crimina+1839+ecuador&source=bl&ots=lrYVdL7wi-&sig=-k6HmTm8N7LV-#v=onepage&q&f=false>.

Ferrajoli, L. (2001). *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. (A. d. Cabo, & G. Pisarello, Trads.) Madrid: Trotta.

Ferrajoli, L. (2018). *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal* (10ª ed.). Madrid: Editorial Trotta.

Francia, Asamblea Nacional. (26 de 08 de 1789). *Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano*. Obtenido de https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf.

Gálvez, I. (2016). La política criminal y sus campos de actuación. La experiencia cubana. *Revista de la Facultad de Derecho*(41), 125-154.

García, J. (17 de 04 de 2017). *Principio procesal de inocencia*. Obtenido de Revista Derecho Ecuador: <https://www.derechoecuador.com/principio-procesal-de-inocencia->.

García, S. (2016). *El sistema penal en la constitución*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.



- Godio, L. M. (2016). Los principios generales de derecho como fuente del derecho internacional público. *Revista de Derecho*, 15(30), 47-68.
- Hernández, J. (2015). Prólogo. En M. Á. Aguilar, *Presunción de inocencia. Derecho humano del sistema penal acusatorio* (págs. 15-20). México: Instituto de la Judicatura Federal.
- Herrera, C. E. (2015). El principio de presunción de inocencia del proceso penal panameño. *Lex*(1), 1-23.
- Hobbes, T. (2013). *Diálogo entre un filósofo y un jurista y escritos autobiográficos*. Madrid: Tecnos.
- Ibáñez, P. A. (2005). *Garantismo: una teoría crítica de la jurisdicción*. Madrid: Trotta.
- Ihering, R. v. (2013). *La dogmática jurídica*. (J. I. Neto, Trad.) Sao Paulo: Ícone.
- Jellinek, G. (2003). *La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano* (2a ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Juan sin Tierra. (2008). Carta Magna 1215. En J. Machicado, *Carta Magna de Juan sin Tierra* (págs. 10-20). Bolivia: Centro de Estudios del Derecho.
- Maier, J. B. (1993). Entre la inquisición y la composición. *Juris: Revista de Derecho Penal*, No. 2, 40-63.
- Maier, J. B. (2001, p. 810). Entre la inquisición y la composición. En L. A. Arroyo Zapatero, & I. B. Gómez de la Torre, *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos: "in memoriam" Volumen II* (págs. 801-814). España: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - Universidad de Salamanca.
- Mancero, P. (2011). *El tránsito del Estado Social de Derecho al Estado Constitucional de Derechos y Justicia: Su implicación en la garantía jurisdiccional de los derechos sociales*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Manzini, V. (1951). *Tratado de Derecho Procesal Penal* (Vols. II: Los sujetos de la relación procesal (el juez, jurisdicción y competencia, el Ministerio Público, las

partes privadas, los defensores)). (S. S. Melendo, & M. A. Redín, Trads.) Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.

Martin, F. (2011). Presunción de inocencia como derecho fundamental en el ámbito de la Unión Europea. *Revista Europea de Derechos Fundamentales*(18), 133-166.

Mosquera, S. (2018). Fuentes y Principios del Derecho Eclesiástico Peruano. *Vox Juris*, 36(2), 57-76.

Narváez, M. H. (2003). *Procedimiento Penal Abreviado*. Quito: Librería Jurídica Cevallos.

Nieva, J. (2016). La razón de ser de la presunción de inocencia. *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*(1), 1-23.

Nogueira, H. (2005). Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia. *Ius et Praxis*, 11(1), 221-241.

OEA, CEIDH. (22 de 11 de 1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Obtenido de Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (San José): https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm.

ONU, Asamblea General. (10 de 12 de 1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. Obtenido de Adoptada y proclamada en su resolución 217 A (III): https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf.

Pérez, T. d. (2016). Una aportación a la reconstrucción del derecho subjetivo en el estado constitucional de derecho. *Anuario de Filosofía del Derecho*(32), 235-263.

Picado, C. (2012). *La imparcialidad del juez*. San José: Investigaciones Jurídicas S.A.

Prieto, L. (2011). *Apuntes de teoría del derecho* (6a ed.). Madrid: Trotta.



- Savigny, F. C. (2005). *Sistema de derecho romano actual*. (M. D. Bas, Trad.) Granada: Comares.
- Truyol y Serra, A. (1997). *Fundamentos de derecho internacional público* (4a ed.). Madrid: Tecnos.
- Vázquez Rossi, J. E. (2011). *Derecho Procesal Penal Tomo II. El Proceso Penal*. Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni Editores.
- Vázquez Rossi, J. E. (2011). *Derecho Procesal Penal Tomo I. Conceptos Generales*. Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni Editores.
- Villanueva, A. (2015). La presunción de inocencia. Una aproximación actual al derecho. *Revista Catalana de Dret Públic*(51), 209-222.
- Villavicencio, J. C. (2016). *Las Garantías Judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Virginia, Convención. (12 de 06 de 1776). *Declaración de Derechos de Virginia*. Obtenido de <http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-hist-Virginia.html>.
- Windscheid, B. (1987). *Tratado de derecho civil alemán* (Vol. I). (F. Hinestrosa, Trad.) Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Zambrano, A. (2009). *Estudio Introductorio a las Reformas al Código de Procedimiento Penal*. Quito: Corporación del Estudios y Publicaciones.
- Zoltan, K. (2003). *Roma corrupta, Roma perversa*. México: Porrúa.